

CyP

Revista Cambios y Permanencias

Publicación multi e interdisciplinar
orientada a los estudios sociales

Revista Cambios y Permanencias

Grupo de Investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación

Vol. 10, Núm. 1, pp. 160-214 - ISSN 2027-5528

¿Cuán organizada es la organización?

La 'zona gris' de Javier Auyero, los saqueos del 2001 en la Argentina y la teoría del complot contra De la Rúa: Un debate

How organized is the organization?

The 'gray zone' of Javier Auyero, the looting of 2001 in Argentina and the theory of the plot against De la Rúa: A debate

Julián Zicari

Universidad de Buenos Aires
CONICET
orcid.org/0000-0002-8575-2636

Recibido: 12 de diciembre de 2018

Aceptado: 14 de marzo de 2019



Grupo de
Investigación
Historia
Archivística y
Redes de
Investigación

¿Cuán organizada es la organización? La ‘zona gris’ de Javier Auyero, los saqueos del 2001 en la Argentina y la teoría del complot contra De la Rúa: Un debate

Julián Zícari
Universidad de Buenos Aires
CONICET

Licenciado en Historia, Licenciado en Economía,
Licenciado en Psicología, Magíster en Historia
Económica, Doctor en Ciencias Sociales por la
Universidad de Buenos Aires.

Correo electrónico: sanlofas@hotmail.com

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8575-2636

Resumen

El trabajo indaga el libro de Javier Auyero *La zona gris*, que representa la versión académica sobre la teoría del complot y la orquestación de los saqueos del 2001. Así se buscará cuestionar el planteamiento de Auyero para ofrecer una mirada alternativa a la establecida. El artículo se dividirá en cinco partes. La primera tratará de presentar las hipótesis de Auyero y cómo están construidas. La segunda explicará por qué el autor responsabiliza al Partido Justicialista de los sucesos. La sección próxima aborda los problemas inherentes a la metodología y la epistemología utilizada por Auyero, para luego reconsiderar varios elementos silenciados por dicho autor que permitirían considerar a los saqueos de un modo alternativo a los de la caracterización dominante. Por último, el trabajo cerrará con algunas conclusiones al respecto.

Palabras Clave: Saqueos, clientelismo, 2001, Peronismo

How organized is the organization? The 'gray zone' of Javier Auyero, the looting of 2001 in Argentina and the theory of the plot against De la Rúa: A debate

Abstract

The work investigates the book by Javier Auyero *The gray zone* as it represents the academic version on the theory of plot and the orchestration of pillage of 2001. This will seek to question the proposal of Auyero to try to offer an alternative look to the established. The article will be divided into five parts. The first will try to present the Auyero hypotheses and how it is constructed. The second will explain why the author blames the Justicialista Party for the events. The next section deals with the problems inherent in the theory and methodology used by Auyero, and then reconsider several elements silenced by Auyero that would allow looting to be considered in an alternative way to those of the dominant characterization. Finally, the work will close with some conclusions about this.

Keywords: Riots, clientelism, 2001, Peronism

Introducción. La organización en el duelo de las imágenes de diciembre

Cuando se recuerda el año 2001 en la Argentina y las jornadas del 19 y 20 de diciembre, que pusieron fin al gobierno de Fernando De la Rúa, dos imágenes primordiales parecen venir a la memoria sobre esos días. Una primera, que evoca la protesta en la Plaza de Mayo y el cacerolazo que le dio origen, sucesos que suelen estar enmarcados bajo un tinte de gesta republicana, donde la “gente común” o la “clase media” salió a expresarse “civilizadamente”, de forma honesta y valiente, sin otro interés más que el de manifestar su disconformidad con la situación vivida por entonces. La segunda imagen de esas mismas jornadas es prácticamente la opuesta, ya que se refiere a los saqueos del conurbano bonaerense. En este caso, las representaciones refieren a hechos de violencia, forajidos, delincuentes y habitantes de las villas que realizaron acciones deliberadas de robo, las

cuales probablemente estuvieran organizadas políticamente por los punteros del peronismo, que manipularon a los pobres a través del clientelismo político. Así ya no se habla de “la gente”, “los manifestantes” ni de “personas”, utilizando rara vez la palabra “vecino” para mencionar a sus participantes. Un ejemplo al respecto es una nota del diario *La Nación* en la cual se trata de informar a sus lectores lo sucedido inmediatamente tras esas jornadas:

Buenos Aires fue testigo anteayer de dos fenómenos insólitos. Por un lado, saqueos a comercios en lo que –según los testigos visuales- no se trató precisamente de calmar el hambre. Eran pequeños grupos que robaron lo que encontraban y a los que se unieron ocasionalmente quienes aprovecharon para participar en el reparto. El otro [fenómeno] fue más inédito. Se trató de una respuesta, en gran medida espontánea, de gente común, tranquila que salió a la calle para expresar la bronca casi incontenible que necesitaba compartir con otro. (*La Nación*, 21 de diciembre de 2001)

Resulta claro que la lectura contrastante de los sucesos no podría ser mayor. Incluso hasta hoy en día se guardan recuerdos de este tipo, donde las dos formas de acción colectiva son asociadas a fenómenos muy distintos. Como han señalado Enacam y Rocca (2007) en su análisis sobre la cobertura de los medios gráficos nacionales de las jornadas de diciembre de 2001, destacando que “se marca una clara dicotomía entre los ‘pequeños grupos’ que saquean y la ‘gente común’ que salió a las calles para expresar su ‘bronca’. Esa ‘gente común’ es descripta como ‘tranquila’ y espontánea, es decir, no politizada ni organizada sino como una multitud que irrumpe momentáneamente en el espacio público para manifestar su bronca [y expresarse políticamente] [...] [En cambio] los saqueos no se entienden como una consecuencia o respuesta a una o varias necesidades económicas y sociales, sino como un ‘delito’ que debe ser tratado en términos policiales/jurídicos y no en términos políticos” (2007, p. 44). Según el análisis de dichas autoras, entonces, cada uno de los fenómenos señalados se liga a cadenas asociativas distintas. Por ejemplo, existirían dos ecuaciones representacionales claras: una sería cacerazo = clase media = espontáneo = pacífico = desinteresado = libre; mientras que la otra parece tener atributos distintos: saqueo = pobres = organizado = violento = espurio = manipulado. Es por ello que la consecuencia directa de ambas caracterizaciones termina por ser tan dispar según las

autoras: si los cacerolazos fueron hechos presentados como legítimos y claramente “políticos”, los saqueos en cambio son hechos principalmente ilegales, más cercanos al tratamiento policial y jurídicamente punible, que a las manifestaciones de protesta en un contexto sociohistórico específico.

La construcción de imágenes sobre cómo considerar y con qué asociar los sucesos sociales entonces no puede ser neutral ni ingenua de ningún modo en sus consecuencias. Por más que hayan sido comportamientos agregados hijos del mismo proceso histórico, ya hayan sido contemporáneos, ocurridos al mismo tiempo, e incluso pudieran haber compartido participantes, la valoración es bien distinta: unos pueden ser retratados como héroes cívicos mientras que los otros no tienen nada de loables. En todo caso lo que parecería darles un desigual tratamiento a los sucesos para establecer la distinción “político vs policial”, y que parece ser la clave de todo, es lo referido al tipo de organización que supuso uno y otro hecho. Puesto que los cacerolazos y los sucesos ocurridos en la Plaza de Mayo a pesar de contradecir abiertamente la normativa del estado de sitio vigente cuando ocurrieron y, por ende, de contradecir la ley y de ser comportamientos ilegales, suelen ser valorados como legítimos principalmente por haber sido “espontáneos”, estableciendo que fueron acciones colectivas sin coordinación previa, sin agentes institucionales convocantes, ni una organización definida que los estructurara. Para el caso de los saqueos, aunque también contradicen la normativa legal –en este caso la de violar los derechos de propiedad-, parecen ser condenables no sólo por ello, sino sobre todo por cargar con la sospecha de haber sido orquestados políticamente: ya no se trataría entonces de sucesos espontáneos –y, en consecuencia, “genuinos”- sino que fueron por sobre todas las cosas hechos de violencia y robo generados de manera intencional.

Por todo lo repasado parece ser necesario evaluar varios de los presupuestos con los que cargan las caracterizaciones señaladas. Especialmente para el caso de los saqueos de diciembre de 2001. En este sentido, para abordar algunos de los componentes con los cuales suelen estar asociados los saqueos en la Argentina buscaremos analizar los aportes realizados por Javier Auyero al respecto, quien ha sido uno de los científicos sociales más

influyentes con su consabido libro *La zona gris* (Auyero, 2007), en el cual ha trabajado con detenimiento el tema y que representa. de alguna manera, la versión académica sobre la teoría del complot y la orquestación de los saqueos. De este modo, se buscará descomponer los modos en que Auyero investigó los saqueos en el país y cómo han sido entendidos estos para tratar de ofrecer una mirada alternativa a la establecida por el sociólogo. En principio, porque creemos que puede haber, a grandes líneas, dos formas excluyentes de entender los saqueos del 2001. Por un lado, puede tomarse una imagen ciertamente espuria y conspirativa sobre los saqueos, en la cual estos fueron organizados de algún u otro modo por las elites políticas del peronismo en el conurbano bonaerense, y que tuvieron como principal objetivo generar caos, desestabilizar al gobierno de la Alianza y finalmente con eso forzar la renuncia de De la Rúa. Imagen que hasta ahora ha sido en mayor o menor medida la dominante. Entonces, de ser así, los saqueos deben estudiarse en función de las operatorias partidarias, las maquinas clientelares, las redes de punteros, la teoría del “complot” y con estudios sobre cómo operó el estado provincial para producir un estallido social digitado, dirección que en gran medida siguió el abordaje de Auyero. Pero en cambio, por otro lado, si se lograra descartar totalmente la idea de que los saqueos estuvieron armados políticamente y que no tuvieron ningún tipo de organización partidaria previa, entonces los saqueos deberían considerarse de un modo totalmente distinto al anterior y ya no podrían ser asociados de ninguna manera a “oscuros intereses”, sino a fenómenos de otro tipo, mucho más cercanos a las protestas populares de la Plaza de Mayo y los cacerolazos, con lógicas de acción colectiva –si se quiere- tan “genuinas”, “espontáneas” y políticamente libres como aquellas, que a los sucesos policiales con los cuales han estado vinculados hasta ahora.

Con vistas a estos puntos, este trabajo se organizará de la siguiente manera. Primero se tratará de presentar las hipótesis de Auyero y cómo están construidas. Luego se tratará de señalar por qué el criterio seguido por el autor responsabiliza al Partido Justicialista de los sucesos. La sección próxima aborda los problemas inherentes a la teoría y la metodología utilizada por Auyero, para luego reconsiderar varios elementos silenciados por dicho autor que permitirían cuestionar los puntos centrales de su planteo y, por ende,

reconsiderar o incluso abandonar su esquema argumental. Así, una vez cuestionados los aspectos más importantes de la *Zona Gris*, se presentarán algunos indicios para considerar a los saqueos de un modo alternativo a los de la caracterización dominante. Por último, el trabajo cerrará con algunas conclusiones al respecto.

La zona gris de Auyero

Javier Auyero es un importante cientista social en la Argentina. Ha sido pionero en muchos aspectos sobre las formas de funcionamiento de la política partidaria y del Estado en torno a los barrios humildes y los sectores populares, especialmente en el conurbano bonaerense. Sus trabajos *¿Favores por votos?* (1997) y *La política de los pobres* (2001) son sin dudas material obligatorio para quienes estudian dichas problemáticas. Por ello mismo, y como una suerte de continuidad de sus análisis previos, en su libro *La Zona gris. La violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea* (2007) ha dado un paso más, indagando principalmente lo referido a los saqueos de diciembre de 2001 en el mismo territorio. De hecho, una especialista que publicó sobre la crisis y los saqueos de ese año, aunque con reparos, señala al libro de Auyero como el “trabajo más completo sobre los saqueos del 2001” (Gordillo, 2017, p. 205).

Las premisas de Auyero (2007) en este nuevo trabajo se basan en señalar que los saqueos, entendidos dentro de la conceptualización de Charles Tilly como una forma de violencia colectiva, no irrumpieron como una forma de acción caótica, sino que contaron con diversos grados de organización (p. 26 y 30). Auyero explícitamente va a destacar tres formas de organización que es imprescindible atender al respecto: que los saqueos fueron realizados por grupos (y no por individuos aislados), que en los hechos la policía jugó un rol de ausencia, inactividad o incluso complicidad (es decir, que la relación entre los grupos de saqueadores y las fuerzas del orden no fue necesariamente de oposición) y que los rumores también cumplieron un papel clave dado que permitieron estipular y anticipar comportamientos (los rumores se distribuyeron en torno a las relaciones familiares,

vecinales, de amistad y partidarias) (Auyero, 2007, p. 30-33). A su vez, hay otras “anomalías” que señalarían que los sucesos siguieron más bien reglas claras antes que lógicas anárquicas: los negocios saqueados tuvieron un trato diferencial entre pequeños y grandes, hubo “zonas liberadas” por la policía, existió una estricta delimitación geográfica en los episodios que no se trasgredió, según los testimonios recolectados por Auyero, las personas que lideraron los saqueos dieron indicaciones precisas sobre qué hacer, por donde ir, distribuyeron las tareas y en la mayoría de los casos la presencia o dirección de los punteros políticos partidarios jugó un rol fundamental en todo esto.

El objetivo del trabajo de Auyero (2007) es el de clarificar y conceptualizar la existencia de una “zona gris” definida como “el área de relaciones clandestinas en que la política partidaria converge con la violencia extraordinaria” (p. 47). Así, la zona gris permitiría articular de mejor modo los puntos de contactos entre las formas de funcionamiento de la vida cotidiana, la política partidaria habitual en el conurbano (el clientelismo, los punteros, etc.) y los sucesos extraordinarios que allí irrumpieron, destacando que las partes visibles de la política conviven necesariamente con lógicas clandestinas, oscuras, que las sostienen. Es decir, es la zona que permitiría articular lo legal y lo ilegal, lo cotidiano/“normal” y lo extraordinario. Por ello, según Auyero (2007), y a partir de rastrear las tres pautas de organización arriba descriptas, los saqueos habrían estado organizados premeditadamente por las fuerzas partidarias del peronismo, principalmente a través de tres mecanismos básicos que fueron indispensables en el accionar de los saqueos: “(1) la creación de oportunidades efectuada por los punteros políticos de los partidos y agentes de policía, (2) la convalidación implícita de los saqueos por parte de las élites del Estado, y (3) la espiral de señales llevada a cabo por los punteros políticos” (p. 51). Con todo esto se podría entender cómo las élites partidarias “producen”, “fomentan” e “instigan” a través de sus redes clientelares y punteriles al accionar de hechos dañinos e ilegales en función de su propia conveniencia, utilizando a la violencia colectiva como una herramienta más y manipulando a las masas (las “hordas de saqueadores” como a veces son mencionadas) y digitando en consecuencia operaciones de gran envergadura con un claro control: puesto que el manejo de los recursos que provee la *zona gris* es posible

planificar, poner en funcionamiento, organizar, delimitar y poner fin estricto de grandes episodios de violencia colectiva como fueron los saqueos. En resumen, a partir del concepto de “zona gris” se podrían ver dónde “las actividades de aquellos que perpetúan la violencia y aquellos que presumiblemente tratan de controlarla, se unen. Escudriñar esa área gris [...] nos permite comprender mejor la dinámica de los saqueos [...] [porque] conduce nuestra atención hacia un área borrosa donde los límites normativos se disuelven, los actores del Estado y las élites políticas promocionan o activamente toleran o participan en la producción de los daños” (p. 54).

Por el tipo de propuesta que supone el concepto de “zona gris” abiertamente el planteo de investigación se concentra en explicar la dinámica interna de los saqueos más que en sus causas, explorando las dimensiones políticas (Auyero, 2007, p. 41). Hay entonces un análisis sincrónico más que diacrónico o secuencial, donde se deja de lado los por qué de los comportamientos para indagar en el cómo y su entorno relacional (Auyero, 2007, p. 37). Dada la manera en que operó el accionar ocurrido en diciembre 2001 es pertinente, según Auyero (2007), utilizar su teoría de la zona gris como eje analítico central, puesto que fue “cuando las fuerzas represivas no ‘reprimían’ sino que, a veces, saqueaban; cuando los saqueadores eran ayudados en sus acciones dañinas por actores estatales; y cuando las relaciones entre saqueadores y autoridades eran obviamente tan intensas que resultaba difícil considerarlos como actores diferentes”. Por ello su “trabajo se ocupa del problema [de los saqueos] concentrándose en los punteros políticos partidarios y los agentes de policía (y sus relaciones a menudo oscuras y clandestinas) como conectores clave entre la política partidaria y la acción colectiva extraordinaria” (p. 41).

Un ejemplo por demás elocuente de la propuesta de Auyero es citar un volante en el cual se invitó abierta y deliberadamente a saquear en un barrio pobre de Moreno, indicando el horario y el supermercado en el cual estaba planificado que ocurriría la violencia. Para Auyero no hay ninguna duda que los saqueos fueron organizados previamente y estos papeles serían una prueba irrefutable al respecto. Donde los “volantes, además, destacan una dimensión a la que los estudiosos de la violencia colectiva recién últimamente han

empezado a prestar la debida atención: el papel de los dirigentes políticos en la promoción, inhibición y canalización (o todo ello a la vez) del daño físico a objetos y personas. Al examinar minuciosamente las acciones específicas de los punteros políticos y las redes específicas que ellos movilizaron durante los saqueos de diciembre 2001, este libro arroja luz sobre la interacción entre la política partidaria y la violencia popular” (Auyero, 2007, p. 24). En este sentido, otra prueba más sobre la acción organizada de los saqueos lo representan la contracara inmediata de esas acciones: la gran mayoría de los comercios que no fueron saqueados, según los testimonios presentados por Auyero (2007), debieron pagarle a la policía para que eso no ocurra (p. 138-139).

Finalmente, citando a Piven y Cloward, nuestro autor hablará del “poder de disrupción” como una herramienta más con la cual funciona la política y las relaciones de fuerza entre actores, especialmente en la capacidad de asegurar la gobernabilidad en el conurbano bonaerense. Aunque aclarando que en el caso de los saqueos del 2001 “esta forma de poder no es de ‘los pobres’ sino el de los actores que pueden establecer contacto con las relaciones clandestinas que definen la zona gris” (Auyero, 2007, p. 199), ya que la “amenaza de disrupción” es inmensa y es un factor de poder que las autoridades y gobernantes no pueden desconocer para tener pacificados y bajo su control los territorios que gobiernan. Por lo tanto, concluirá Auyero para cerrar su idea de la orquestación premeditada de la violencia en el caso de los saqueos y negar cualquier tipo de inspiración genuina o popular en ellos (puesto que no son los sectores subalternos o los pobres quienes pueden activar un poder de acción colectiva como los saqueos por sí solos), sino que son únicamente los punteros, maquinarias y partidos políticos los “que pueden poner en funcionamiento la sinapsis de la zona gris [los que] serán capaces de producir disturbios civiles y también de controlarlos. Si mi análisis es correcto, el poder de disrupción ejercido por sectores del Partido Justicialista y de las fuerzas represivas es algo que debe ser tomado muy en serio. [En lo que]las relaciones entre Estado y sociedad en la Argentina actual deben tener en cuenta a estos actores y su poder de disrupción” (p. 200).

Dado entonces este esquema tratemos de indagar con mayor claridad quien es el actor central de la producción de los hechos de los saqueos y cuáles son las motivaciones para hacerlo. A esto nos abocaremos en la próxima sección.

¿Quién y por qué? El sospechoso de siempre: el Partido Justicialista

Si se acepta la teoría defendida por Auyero sobre la diagramación premeditada de los saqueos por parte de las elites estatales, las preguntas que parecen desprenderse con facilidad son dos: ¿quién y por qué los orquestó? Las respuestas de Auyero ante esto son claras. El responsable de poner en marcha los mecanismos para generar la violencia colectiva que implicaron los saqueos fue el peronismo, el Partido Justicialista (PJ), con su maquinaria política. Es con esta premisa que Auyero (2007) buscará justificar el tipo de trabajo realizado en su libro:

[...] al observar más de cerca el funcionamiento de la maquinaria peronista conjuntamente con la entrega de programas de asistencia social a los pobres, no porque el peronismo tenga el monopolio del clientelismo (la política clientelista es importante en el peronismo, pero el peronismo no es el dueño de esta práctica), sino porque es allí donde muchas dimensiones cruciales de la maquinaria política pueden ser mejor observadas [...] Debido a su importante papel en los saqueos del 2001 en los dos sitios investigados [en este libro, se] presta especial atención a uno de los actores clave en la maquinaria peronista (es decir, los punteros políticos, uno de los actores de la política argentina contemporánea de los que más se habla pero de los que menos se sabe) (p. 73).

El responsable entonces es más que claro, donde las alusiones al peronismo están presentes en todo el libro. Esta idea no es original de Auyero ya que prácticamente desde que ocurrieron los hechos las sospechas estuvieron dirigidas hacia el PJ. Un año después de los saqueos del 2001, muchos protagonistas aseveraban que el peronismo, especialmente en la provincia de Buenos Aires cuando era gobernada por Carlos Ruckaff y que tenía como jefe político a Eduardo Duhalde, podría hacer exactamente lo mismo si éste lo deseaba. Así, el dirigente piquetero Luis D'Elía señalaba que "Si el PJ no quiere, no hay saqueos" (*La* 169

Nación, 18 de diciembre de 2002), mientras que el líder radical Melchor Posse aseguraba que ese diciembre tampoco se producirían los saqueos ya que en 2001 “el autor de los saqueos, el corresponsable es el [actual] presidente de la República”, por lo tanto, con Duhalde ya encumbrado no habría necesidad de que se reproduzcan (*La Nación*, 18 de diciembre de 2002). Algunos años después, la que había sido ministra de Desarrollo Social de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, aseguró lo mismo sobre lo sucedido en 2001: “El peronismo, como es típico, fue y buscó el poder, y, por otro lado, Ruckauf, que era el gobernador de Buenos Aires, no hizo nada. Fíjese que al día siguiente de la renuncia de De la Rúa se acabaron los saqueos. ¿Qué pasó, se acabó el hambre?” (*La Nación* 20 de diciembre de 2009).

Auyero (2007) señala que en algunos lugares no hay ningún tipo de evidencia ni pruebas sobre la presencia de los denominados punteros peronistas. Aun así, asegura que igualmente el peronismo es el responsable por dos motivos: “(a) los punteros peronistas tienen un alto perfil en algunas partes donde los saqueos fueron masivos, produjeron mayores daños y tuvieron mayores consecuencias políticas (es decir, el conurbano) y (b) los funcionarios públicos de la provincia de Buenos Aires, que eran también miembros del Partido Justicialista, impidieron que la policía actuara en cuanto los saqueos estallaron”, en consecuencia para Auyero “no es aventurado aseverar que algunos sectores del partido promovieron la violencia” (p. 161). Por si fuera poco, se presentan testimonios de los punteros peronistas en los que se confirman las sospechas de Auyero. Por ejemplo, un operador político le confirmó que durante una reunión de intendentes de la provincia de Buenos Aires “en diciembre de 2001 (el entonces gobernador) Ruckauf nos dijo (a los miembros del Partido Justicialista) que hiciéramos un gran quilombo en el conurbano” (2007, p. 160): Mientras que otro puntero relató la rigurosa verticalidad del *modus operandi*: “Nosotros (los miembros del partido) supimos de los saqueos de antemano. A eso de la una de la mañana (los saqueos comenzaron al mediodía) sabíamos que se iba a saquear. Se nos informó sobre ellos, y nosotros pasamos la información (entre los miembros del partido)” (2007, p. 131).

Ahora bien, si el actor responsable central de los saqueos parece ser indiscutible, Auyero (2007) rechaza la idea del simple complot para derrumbar al gobierno de De la Rúa como principal motivo de la orquestación, dando una respuesta más a tono con sus análisis previos sobre el clientelismo. De este modo, afirma que el “objetivo final de los peronistas puede no haber sido un golpe de Estado, pero no hay duda de que querían demostrar su poder colectivo”, parafraseando a Clausewitz, remató “Estaban haciendo política por los otros medios (violentos)” (p. 161). En otras palabras, la premisa harto repetida del complot o del “golpe institucional” vía desestabilización no parece central en su explicación, sino más bien la focaliza en el lograr la visibilización del poder político que las maquinarias y redes de punteros son capaces de poner en funcionamiento, manejándolas de manera total. Con esta respuesta, podemos volver a preguntar por qué dichas maquinarias partidarias quisieron exhibir su poder durante 2001, obteniendo la respuesta final de Auyero que cerraría el círculo argumentativo:

Cuanto más recorremos los enclaves de la pobreza, más de cerca vemos que los punteros, patronos y clientes de la máquina peronista hacen cotidianamente en el terreno, y más clara se vuelve nuestra visión de la construcción cotidiana del dominio peronista. Punteros y patronos del Partido Justicialista [una vez pasados los saqueos] prosiguen sus propias carreras políticas, tratan de acumular todo el poder político que pueden y mejoran sus posiciones en el terreno político local. Para ello tratan de maximizar su manejo de recursos estatales (bienes materiales distribuidos por el Estado, programas de asistencia social e información) vitales para solucionar los problemas de los pobres y también para ganar adeptos [dado que h]acen política a través de la solución de problemas [...] [En conclusión, a] atender a sus propios intereses (mejorar sus posiciones en el campo político local por medio de la acumulación de capital político), algunos de ellos consiguen un cuasi monopolio de la resolución de problemas. Al hacerlo, incrementan su capacidad de disminuir y restringir las posibilidades de quienes tienen los problemas (es decir, los dominan)” (2007, pp. 89-90).

Si resumimos la lógica desarrollada por Auyero durante todo su libro obtenemos lo siguiente. Con el manejo de la zona gris el peronismo es capaz de generar acciones de violencia colectiva como fueron los saqueos para demostrar su “poder de disrupción”. Este poder se desplegó a través de la red de punteros y del manejo del clientelismo no tanto con

la finalidad de hacer caer al gobierno de la Alianza, sino de mostrar abiertamente su fuerza desestabilizadora, exhibiendo la capacidad que tiene el peronismo para garantizar (o quitar) gobernabilidad. A su vez, mientras más grande y evidente fuera este poder del aparato partidario, mientras más visible e indispensable se mostrará, sus miembros obtendrían de este modo mayores recursos con los cuales solucionar los problemas de los pobres para así finalmente garantizar su propio dominio sobre ellos. En síntesis, el poder partidario es capaz de generar “quilombo” como el del 2001 para así reproducirse y obtener más poder: es un aparato de dominación de que se retroalimenta a sí mismo y a costa de los pobres.

Epistemología, metodología y teoría: modelo para (des)armar

Sobre la segunda mitad del libro, Auyero (2007) presenta el siguiente testimonio de un comerciante perteneciente a una de las zonas en las cuales hubo saqueos: “No sé mucho de política, pero todo fue un asunto político. Porque si la policía no hace nada, si el gobierno no hace nada... eso quiere decir que todo está organizado, que todo es política” (p. 145). Este relato en más de un sentido podría decirse que resume algunas de las premisas con las cuales Auyero va a defender su propuesta. Por ello es vital desarmar algunos de sus componentes para entender si es posible cuestionar los supuestos con los que trabaja.

El primer punto a destacar es que el razonamiento utilizado apela a una implicación lógica condicional: “si la policía no hace nada” entonces “todo está organizado”. Este tipo de argumentación desnuda una premisa lógica binaria en la cual sólo habría dos posibilidades: o bien la policía reprime (y por lo tanto “hace algo”) o bien la policía no reprime (y por lo tanto “no hace nada”, ergo: está complotada). Sin embargo, es también viable plantear una escala de cuatro opciones para el tipo de comportamiento asumido por la policía que podría ser más sutil, con ligeros deslizamientos en las formas de actuar: en un extremo podemos ubicar la represión lisa y llana contra los saqueadores, en un segundo lugar podemos señalar formas de “acción pasiva” o de “encuadre”, en las cuales hay un

“dejar hacer al saqueo” pero con ciertos límites (por ejemplo que sólo se lleven alimentos, que no haya armas de fuego, violencia física o muertes entre los participantes, que no se saqueen todos los negocios sino sólo algunos, etc.), el tercer tipo es habilitar algunas “zonas liberadas” promovidas por los jefes políticos y policiales, las cuales incluirían la venta de “protección” para algunos comerciantes y que esas zonas no sean entonces totalmente arrasadas y, finalmente en cuarto lugar, el “complot organizado” en el cual las altas esferas políticas no sólo planifican los saqueos sino que le ordenan a la policía que también participe activamente de ello (promoviendo o incluso saqueando).

A primera vista, el esquema que estamos sugiriendo parecería ser algo rebuscado, pero es una herramienta que no podemos dejar de lado. Principalmente porque la justificación del secretario de Seguridad de la provincia en aquel momento, Juan José Álvarez, es similar a ésta. Él presentó un argumento muy importante para explicar cómo y por qué operó la policía durante esas jornadas, diciendo –tanto en la entrevista que Auyero transcribió como lo que dijo el mismo día de los incidentes ante las radios y la prensa (*Clarín*, 20 de diciembre de 2001)- que “prefería lamentar la pérdida de una lata de tomates que la pérdida de una vida” (Auyero, 2007, p. 113). Este criterio debe tener la más alta consideración, porque es una decisión política de suma importancia, tomada en un momento crítico y cuando se tiene muy poco tiempo para deliberar. Se puede opinar y debatir la postura tomada, pero no se puede desconocer el tipo de lógica por el cual se rigió la policía durante esos días. En lo personal estoy totalmente de acuerdo con el planteo de Álvarez como criterio básico: en situaciones de extra convulsión social como las vividas en diciembre de 2001, siempre debe priorizarse la vida por sobre los bienes materiales. El argumento del secretario de Seguridad, por su parte, no terminó allí. Señaló que el grueso de la policía bonaerense no estaba capacitada para enfrentar o intervenir apropiadamente frente a situaciones como esas y que tampoco el número de agentes era suficiente como para hacerlo (dada la cantidad de focos, zonas calientes, número y formas de acción de los participantes), como además no se contaba con el equipamiento adecuado. Transcribimos las palabras de Álvarez pocos meses después de los saqueos de diciembre, negando la existencia de zonas liberadas:

Sacamos a diecisiete mil policías a la calle, de los poco más de veinte mil operativos, sobre un total de cuarenta y cinco mil que tiene la fuerza. Es decir: usamos a todos. No todos son policías anti disturbios. Yo diría que son muy pocos. Agotamos el stock que teníamos de setenta y tres mil balas de goma. Se detuvieron a casi tres mil personas. Se dispararon tres mil cuatrocientas granadas de gas lacrimógeno, tuvimos a ochenta y dos policías heridos, infinidad de patrulleros rotos, y nadie puede denunciar a un solo muerto en esos días a causa de las balas policiales. No me pueden decir que la Policía dejó hacer. Hay más de veinte mil comercios en el Gran Buenos Aires. Debíamos proteger a casi cinco mil. ¿Cómo arma usted una fuerza disuasoria para proteger a cinco mil comercios? [...] Hubo muchos policías con la pistola en la cartuchera, que cumplían tareas de vigilancia. Ese policía está para combatir el delito. No para frenar a saqueadores. Está para que, si hay un intento de robo, emplee su arma. Ahora, a ese policía le llegan cincuenta o cien personas, mujeres con chicos en brazos, a saquear un comercio. ¿Qué hace el policía? ¿Tira? No. Se corre. Eso es lo que se vio por televisión. Lo que no se vio, fue que había doscientas personas alrededor de dos o tres policías. No se nos puede acusar de pasividad, porque fuimos nosotros quienes pedimos al entonces gobierno que enviara fuerzas federales, Prefectura y Gendarmería, a reprimir los saqueos. Y eran fuerzas que no manejábamos nosotros [...] La única orden que di, fue la de evitar los enfrentamientos con la población civil. Esa fue mi principal preocupación. Y no tenemos muertos por la policía. (*Clarín*, 20 de mayo de 2002)

El planteamiento de Álvarez es atendible y luce más que coherente. Las organizaciones ligadas a los Derechos Humanos y de lucha contra la represión policial, que se han dedicado a evaluar el accionar de la policía, señalan que durante esas jornadas murieron 38 personas: 11 en la provincia de Buenos Aires, 9 en Santa Fe, 7 en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Córdoba, 3 en Entre Ríos, 2 en Corrientes y de los tres restantes uno en Río Negro, otro en Tucumán y de una de las víctimas se desconoce el dato (ver CORREPI, CELS, La Vaca, La Izquierda Diario). Si tomamos en cuenta que la gran mayoría de las veces en que la policía actuó en otros distritos para evitar los saqueos, despejarlos o “prevenirlos” se recurrió a un nivel de violencia atroz, con heridos y muchos muertos, entonces fue mejor que la policía hubiera intervenido lo menos posible: muchos saqueos entonces a pesar del fuerte accionar policial igualmente no pudieron ser evitados y sólo se obtuvo en consecuencia heridos, terror y muerte. Uno de los casos más terribles ocurrió en la ciudad de Rosario, en la cual la policía santafecina en un comedor infantil acribilló al militante social Pocho Lepratti cuando éste justamente había dicho “bajen las armas que

aquí sólo hay pibes comiendo” (*Perfil*, 18 de diciembre de 2016). Este tipo de sucesos con una policía “liberada” para reprimir, dio lugar en muchos barrios y ciudades a “ajustes de cuentas” y “excesos” por demás repudiables por parte de las fuerzas del orden. Recordemos que la policía bonaerense tiene un triste y nefasto historial de abusos, torturas y casos de “gatillo fácil” que no puede dejarse de lado a la hora de contemplar los criterios que deben ser dictados para que ésta actúe. En el reportaje que Auyero (2007) le hizo a Álvarez, no sólo repite lo anterior, sino que detalla: a los policías “les dije que aquellos que no tenían equipo antimotines debían permanecer al margen. Con la policía de Buenos Aires, uno tiene que dar órdenes claras [porque si no] los tipos hacen un desastre. Uno no puede decirles que actúen sólo cuando están amenazados, porque uno deja un margen de discrecionalidad y eso es muy peligroso” (p. 113-115).

Evaluando esto, el haber priorizado las vidas humanas parece un acierto en líneas generales o como directriz política central. Eso no quiere decir que su accionar haya sido brillante, o no hubiera problemas o situaciones de violencia totalmente condenables. Sino que lo que buscamos destacar es que, si bien la policía no reprimió como directriz central, en la mayoría de los casos tuvo un “accionar pasivo” y de encuadre frente a los hechos de violencia del conurbano. De ser efectivamente cierto esto, podríamos alejarnos un paso, tan sólo un paso, de la simple idea de la orquestación premeditada y empezar a pensar las cosas de otra manera. Aunque todavía queda mucho por indagar al respecto. Por ejemplo, ¿qué decir entonces de todos los testimonios de comerciantes que dicen que pagaron o dieron mercaderías a la policía para evitar que sus negocios fueran saqueados? Una explicación tentativa que no parece estar en contraposición con el argumento del “accionar pasivo” es la siguiente: la policía estuvo en los lugares en lo que se producían los saqueos y no los reprimió, aunque sí evitó que muchos negocios fueran saqueados ya que trató de evitar el desmadre total, donde, ante las situaciones de descontrol o bien los comerciantes ofrecieron dinero para no ser objeto de los robos o bien en algunos casos los oficiales ofrecieron ese “servicio”. En este sentido, valga una aclaración: ofrecer “protección” cuando es el trabajo y la obligación de la policía proteger no es algo que suceda sólo en momentos extraordinarios como los saqueos o de alguna otra convulsión, sino que desgraciadamente

sucede de manera regular. Por ejemplo, cuando yo trabajé en un bar que servía comidas, mi jefa me había dado la orden de que siempre que entrara al negocio un oficial y me pidiera un café, un sándwich o lo que sea, no dude en dárselo gratis. Otros comerciantes dicen que suelen ser “atentos” o “generosos” con la policía para que, en un ejercicio de retribución tácita, o a veces no tan tácita, cuando los comerciantes requieran de la policía ésta esté presente rápidamente. También es común escuchar que algunos comerciantes compran “rifas” a los policías, hacen “donaciones” a la comisaría o aportan dinero a las “asociaciones de amigos de la comisaría tal”. Lo que se debe notar es que esta práctica, que ciertamente a veces no tiene nada de “voluntaria” y que esconde un alto grado de extorsión, ocurre en momentos ordinarios y habituales, por lo que no es descabellado que ella se sostuviera en momentos extraordinarios. Finalmente, quedaría por encarar el hecho que, en algunos casos, agentes de policía fueron los que perpetuaron los saqueos. Otra vez se podría argumentar algo similar: frente a situaciones en la que todo parecía posible y los oficiales habían recibido la orden de no reprimir, algunos policías aprovecharon la situación y se sumaron a los saqueos. Por citar un caso parecido: cuando se produjeron saqueos en la Argentina en 2013, principalmente porque algunas policías provinciales entraron en huelga, muchos agentes aprovecharon los disturbios para ellos mismos salir a robar. Eso no significó necesariamente que hubiera un complot o algo parecido. Estadísticamente, tanto en 2001 como en 2013, los hechos en que los policías fueron los saqueadores fueron muy bajos en relación al total de hechos ocurridos, por lo que no pueden ser tomados como casos regulares o significativos para explicar el funcionamiento general de la dinámica analizada.

Siguiendo este punto, debe quedar claro que estar presente o participar de un saqueo por más que se trate de policías, punteros o de algún otro funcionario público no es sinónimo de orquestación. Señalemos dos ejemplos al respecto. Muchos testigos dicen que vieron a los llamados punteros en los saqueos y otro tanto dice que no sólo estuvieron allí, sino que fueron ellos los que los lideraron e incluso saquearon. Como el mismo Auyero admite en su libro, eso no quiere decir nada ya que es esperable que los punteros estuvieran durante los saqueos: primero porque viven en los barrios en los cuales sucedieron los

incidentes –por lo que sólo estaban en los lugares en los que habitualmente suelen estar y vivir- y, además, porque como referentes del lugar, es parte de su “función social”, por así decirlo, estar en los momentos y sitios críticos como aquellos. Asimismo, podría usarse del mismo modo el argumento contrario si se desea ver un complot: si no hubieran estado allí también podrían haber sospechas sobre sus ausencias y abonar en consecuencia la idea del complot o de las “zonas liberadas”¹. Siguiendo esta dirección, el relevamiento empírico de Auyero (2007) parece quedar muy pobre de pruebas como para responsabilizar o vincular a los punteros con los saqueos generalizados del 2001: de los 261 saqueos relevados por él, sólo en 66 de ellos (es decir, sólo en el 25% de los casos) se observó la presencia de algún puntero, por lo que el 75% de los hechos no podría ser explicado por los punteros (p. 206). El otro ejemplo que debemos considerar, y que fue fuertemente estudiado por Auyero, es el de la participación abierta y pública en las movilizaciones y disturbios del municipio de Moreno del intendente local, Mariano West. Dicho intendente el 19 de diciembre lideró una movilización junto con el arzobispo del lugar, Fernando María Bargalló (*Página 12*, 20 de diciembre de 2001), fue escoltado por la policía bonaerense hasta las puertas de la Capital Federal (donde miembros de la policía federal no los dejaron pasar), formando una caravana en la cual hubo destrozos y saqueos. Este hecho ofrece múltiples miradas. Por un lado, si se desea ver en esos incidentes la prueba irrefutable de que fueron los intendentes peronistas del conurbano los que organizaron los saqueos, esto podría parecer a simple vista un elemento incontestable. Empero, a nivel de elemento empírico se vuelve a mostrar corto: fue el único caso de los centenares ocurridos en esas jornadas donde ocurrió algo así. Por lo que no se podría hacer de la excepción una regla: si bien es un indicio a considerar, no explica la lógica global. Por otro lado, debe considerarse otra perspectiva de este caso único: es verdad que West era un intendente peronista que llamó a movilizarse contra el gobierno de la Alianza y su política económica, ¿pero acaso no suelen los partidos opositores mostrarse contrarios a las políticas llevadas adelante por los partidos oficialistas? ¿las miles de personas que se movilizaron detrás de West tenían motivos más que suficientes para reclamar por fuera de la idea del simple complot?, ¿fue “menos legítima”

¹ Vale decir que este argumento puede usarse también en el caso de que la policía hubiera reprimido a sangre y fuego los saqueos: quien quisiera ver un complot, podría argumentar que la policía actuó salvajemente sólo para generar más caos y descontrol y así orquestar un mayor grado de violencia colectiva.

esa movilización que las convocadas por esos mismos días en otras partes del país hechas por gremios, piqueteros, comerciantes, empresarios, sectores eclesiásticos y demás? ¿la vuelve un complot sólo que quién la liderara sea un intendente peronista? Si no se quiere caer simplemente en la teoría del complot se puede alegar y debatir entonces irresponsabilidad política o si fue un desatino enorme el haber realizado actos políticos durante días tan complejos. Años después, el mismo West señala que pudo haber sido un error haber actuado como lo hizo, pero señalando que “Si hubiera formado parte de algún complot, hubiera estado escondido. No en las calles” (*La Nación*, 17 de diciembre de 2006). Un funcionario muy ligado al intendente West defendió los sucesos con una lógica similar, justificando su accionar como oposición política: “Nunca llamamos a derrocar al Presidente. Lo que sí hicimos fue convocar a la gente a protestar ante quienes eran los responsables del hambre. Los intendentes del conurbano pagan los sueldos, encienden las luces, barren y limpian. No son responsables de un plan económico” (*Clarín*, 19 de mayo de 2002).

Por su parte, en la presentación de Auyero, su principal herramienta empírica y metodológica para fundamentar sus afirmaciones son las entrevistas por él realizadas algunos años después de los sucesos. Aquí, siguiendo a Quirós (2008, p. 204), valdría la pena preguntarse por los alcances, implicancias y limitaciones de la técnica de la entrevista. Doy un ejemplo que permitiría abrir algunas preguntas. En una investigación que realicé algunos años atrás indagué sobre el rol que habían jugado los operadores financieros en el “corralito”, es decir en las restricciones bancarias que impuso el gobierno de la Alianza en diciembre 2001 (descrito posteriormente por la prensa como “el otro saqueo del 2001” o el “saqueo desde arriba”, ya que muchísimas personas perdieron sus ahorros, de golpe vieron congelada la libre disponibilidad de su propio dinero y demás perjuicios económicos de todo tipo). Entrevisté a gerentes de banco, corredores de bolsa, brokers, grandes inversores, jefes de mesa de operaciones y corredores. Casi todos mis entrevistados dijeron sospechar o saber que iba a ocurrir el corralito (un suceso que tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población argentina). Algunos manifestaron saberlo o sospecharlo pocos días antes de que ocurriera, otros con una semana de anticipación, muy pocos con uno o dos meses y uno

solo seis meses antes. Sobre estas entrevistas dos cosas me llamaron la atención. La primera es que casi ninguno manifestó no saber ni sospechar lo que iba a ocurrir, en donde mientras más ascendía en el cargo o jerarquía de mi entrevistado mayor era la certeza del conocimiento y el tiempo en que había obtenido la información. La segunda es que por diversas eventualidades de la vida me fui enterando que la mayoría de mis entrevistados tuvieron fondos propios, de familiares o de algún conocido, atrapados en el corralito. Esto último pareció desmentir gran parte de las afirmaciones realizadas por ellos mismos, ya que de saber o sospechar que sucedería el corralito como afirmaron, debieron haber actuado de otro modo. Sin embargo, puede ofrecerse una respuesta en la cual todos ellos o casi todos ellos no necesariamente me hubieran “mentido”: el corralito visto en perspectiva fue un hecho que pudo haber parecido lógico retrospectivamente, dadas las fuertes corridas bancarias del año 2001 y la crisis terminal que estaba sufriendo el régimen de convertibilidad². Con ello, lo que posteriormente podría haberle dado a mis entrevistados la visión de que siempre supieron algo que sólo después les resultó obvio o tuvieron conocimiento. Esto mismo pudo haber sido más intenso entonces según ascendían las responsabilidades: un gerente financiero de un banco, por ser parte esencial de su trabajo estar informado y entender realmente lo que ocurre en el mundo financiero, estaba hasta casi imposibilitado de decirme que no sabía o no sospechaba que el corralito estaba por irrumpir. ¿Pasó algo así con los entrevistados de Auyero, exagerando un poco su rol para subir su prestigio, creyeron saber algo que sólo posteriormente les pareció obvio que sucedería?, ¿se podrían sentir avergonzados incluso de decir que no pudieron anticipar lo ocurrido delante de sus narices? No tenemos respuesta ante estos interrogantes. Lo que sí, estos mismos interrogantes no son posibles de ser evadidos, porque incluso muchas afirmaciones parecen ser contradictorias o son imposibles de contrastar. Avancemos hacia allí de la mano de Auyero.

Como hemos destacado en la sección anterior, los motivos que alega Auyero para que el aparato partidario del peronismo orquestara los saqueos fue esencialmente el demostrar su poder desestabilizador, actuando con una lógica del tipo “a mayor caos,

² La convertibilidad era la ley se hacía valer a una paridad fija a un peso argentino con un dólar estadounidense

mayor visualización de su poder y por ende mayor botín a conseguir luego”. No obstante, este tipo de argumentación, Auyero tomará otra dirección en otras partes de su libro. Así señalará, “carezco de pruebas fehacientes para demostrar las afirmaciones de Susana y de Pablo [dos de sus entrevistados] respecto de negocios ‘marcados’ y punteros abiertamente dirigiendo el accionar de la gente” (2007, p. 156). Con ello, si en varios momentos de su libro señaló que la red clientelar del peronismo fue la que armó prácticamente todo durante los saqueos con un mecanismo de relojería sumamente preciso, luego introducirá matices a esto. Ya que declarará descreer que los punteros pudieran haber orquestado la totalidad de lo sucedido e incluso que hayan reclutado seguidores para llevarlos a los saqueos. Anulando toda implicación material concreta de los punteros, Auyero igual defenderá la centralidad de la red de punteros para provocar los saqueos, señalando que, aunque no fueron autores del grueso del entramado “hicieron algo clave: hicieron correr la voz sobre la ubicación del saqueo [...] [En consecuencia] a pesar de los informes que dicen que los punteros ‘llevaron’ a los futuros saqueadores a los sitios, a mí me parece que el papel de los punteros fue menos directo. A través de sus redes, los punteros divulgaron la información (o sólo el chisme) con respecto a la posible distribución de alimentos en los supermercados locales. Algunos punteros a los que entrevisté me dijeron (y tengo buenas razones para creerles) que durante los saqueos sus superiores en el gobierno municipal les dijeron que ‘traten de calmar las cosas’” (p. 156-158).

Con estas afirmaciones Auyero parece haber dado por lo menos tres giros argumentativos que incluso podrían contradecir sus tesis centrales. El primero es el que ya destacamos: la presentación inicial del rol jugado por la maquinaria peronista se redujo notablemente en el tipo de accionar que había parecido central. Ahora parece que “no reclutaron seguidores”, “no marcaron negocios”, “no lideraron los desvanes” ni tampoco “saquearon ellos mismos”, sino que sólo “ejercieron rumores o chismes”. El segundo giro argumental es que la motivación y función fundamental del aparato partidario dejó de ser el de generar el mayor tipo de violencia colectiva posible (“orquestar un quilombo”) para pasar a convertirse, en abierta contradicción con lo anterior, en operadores de la pacificación, la contención y la de buscar tan sólo “calmar las cosas”. El tercer giro, más

sutil si se quiere, pero fundamental, a fin de cuentas, es que la conceptualización de “zona gris” se vio modificada: el área que articulaba la política partidaria clandestina con la violencia extraordinaria se cristalizó esencialmente en ser solo una red de información por la que circulan chismes y rumores. He aquí el secreto de la todopoderosa maquinaria peronista: hacer circular chismes y murmullos.

Si el primero de estos giros debe llamar ciertamente la atención con respecto al rol de los punteros que tanto se había magnificado y el segundo giro luce en conflicto con las líneas maestras del esquema desplegado por Auyero, el tercero es sin dudas el más importante. ¿Por qué? Porque en el esquema teórico sobre el cual se apoyará Auyero en varios tramos es el de Sidney Tarrow (1997) ligado a la Estructura de Oportunidades Políticas (EOP). Para Auyero, al recurrir a este enfoque, lo más importante durante los saqueos fue entonces la circulación de rumores, principalmente por el tipo de oportunidades y disposiciones que permitió crear, ya que, según el esquema de la EOP, la oportunidad es la variable indispensable para explicar la acción colectiva. Como afirmará Auyero (2007): “Para parafrasear un viejo refrán, la oportunidad hizo al saqueador [...] [puesto que] el saqueo fue posible, comentó la mayoría de nuestros entrevistados, gracias a las oportunidades que creó” (p. 182).

La propuesta conceptual ligada a la EOP tiene algunas fortalezas que se pueden destacar. Igualmente, más allá de ellas, este tipo de enfoque teórico presente fuertes problemas que llevarán a Auyero a tener grandes descuidos de fundamentación. Señalemos dos de las críticas más comunes con vistas al esquema de la EOP. El primero responde al llamado “circulo vicioso” argumentativo que utiliza: la acción colectiva es explicada por la oportunidad creada (ya que sin oportunidad supuestamente no hay acción). Empero, no es posible saber de la existencia de oportunidades sin que la acción colectiva ocurra. De allí que la EOP, que debería hacer de la oportunidad su variable independiente, más que ofrecer un modelo explicativo fiable y claro sólo presenta un presupuesto argumentativo que no es posible contrastar, pues finalmente nunca hay tal variable independiente (Farinetti, 2002). En este sentido, un fenómeno como el ocurrido durante diciembre de 2001 no se puede

explicar con esa lógica: los sucesos no se producen únicamente porque se “presentó” o se “creó” una oportunidad, hay otros elementos de todo tipo que deben indagarse. Por ejemplo, a fines de 2013 cuando las policías provinciales comenzaron sus protestas en 21 de los 24 distritos del país (en las que tomaron medidas tales como las marchas, guardias mínimas, el autoacuartelamiento o directamente dejaron de prestar servicios) sólo hubo saqueos en 13 provincias, aun cuando en muchas de ellas hubo “oportunidades” para saquear aparentemente sin restricciones (Pereyra y Semán, 2017). No alcanza la “oportunidad” o “liberar zonas” para explicar los saqueos masivos y menos un 2001³.

En línea directa con esto último, presentemos la segunda crítica. Auyero y la teoría de la EOP priorizan el análisis sincrónico antes que diacrónico según lo señalamos en la sección anterior, en el que la perspectiva de lo cotidiano es la que debe permitir entender las bases sobre las cuales emerge lo extraordinario. En ello, lo habitual más que la secuencia histórica es el eje explicativo. De este modo, la pregunta es por el cómo sucedieron los saqueos más que por el porqué de ellos. El problema con esto es que hacer el abordaje de un fenómeno social tan concreto y específico como son los saqueos no puede estar desvinculado de ninguna manera de su contexto histórico de referencia y de las dinámicas sociales que les dan sentido, algo que Auyero dejó sistemáticamente de lado. Por lo cual, tratemos de reponer los “olvidos” y elementos no contemplados por el autor de *La zona gris*.

³ Con respecto al uso de los “rumores” por parte de la policía para generar ciertas situaciones durante el 2001, todos los testimonios indican que no se usaron para que se produzcan los saqueos, sino más bien para evitarlos: varios policías difundieron en sus localidades que “gente de otros barrios estaban viniendo a saquear”. Eso hizo que las personas se atrincheraran en sus casas buscando protegerse, aunque también hizo subir la paranoia y crear momentos de peligrosa tensión. Pero el objetivo de usar esos rumores entonces, por más criticable que fuera, no fue que aumentara el caos y que miles de personas se movilizaran, sino que se quedaran en sus viviendas y barrios: fue una estrategia de control psicológico, repudiable, pero sumamente efectiva, rápida y barata. Ver la entrevista de Álvarez antes citada, (*Clarín*, 20 de mayo de 2002). Por su parte, el uso de los rumores para contener a la población ya había sido utilizados por la policía de Buenos Aires y de Santa Fe en los saqueos de 1989 (Neufeld y Cravino, 2007).

Los “olvidos” de Auyero y la posibilidad de una explicación alternativa

En la introducción de su trabajo Auyero (2007) dice “Este libro brinda la primera descripción analítica disponible de los saqueos de diciembre de 2001” (p. 25). Dicha afirmación es totalmente incorrecta, puesto que el libro de Auyero se publicó recién en 2007 y antes que él muchos investigadores e investigadoras a través de distintos grupos de investigación publicaron sus desarrollos y perspectivas sobre el tema. Se pueden citar los informes del Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva del Instituto Gino Germani sobre las formas que asumió la protesta social durante el periodo (2002), los relevamientos de la Fundación Nueva Mayoría (2002a; 2002b; 2003), los análisis del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) (2002; 2003; 2004), los relatos de información provistos por la UNGS que el mismo Auyero utilizó, las entrevistas de Fradkin y Brasco realizadas a estudiantes de las escuelas secundarias del conurbano criados durante los saqueos de 1989 y 2001 (2004), junto con los debates desde las miradas marxistas y de izquierda sobre si la clase obrera durante los sucesos de diciembre tuvo un claro programa político de acción propio a ejecutar o más bien irrumpió dominando las escena de forma “espontanea” (Altamira, 2002; Sartelli, 2003; Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003; 2006). De haber considerado los trabajos realizados previamente por sus colegas, Auyero quizás se podría haber enriquecido con otras miradas y análisis sobre los sucesos, a la par de contemplar muchas situaciones por él fuertemente ignoradas. En este sentido, en su prefacio Auyero (2007) dice “Los saqueos de 2001 duraron alrededor de una semana [...] desde el 14 hasta el 22 de diciembre de 2001” (pp. 12-14). Esta afirmación es también categóricamente falsa y debe quedar muy en claro la importancia que implica conocer (o desconocer) ciertos hechos fácticos fundamentales, porque con ellos se puede dejar de lado varios de los presupuestos con lo que Auyero desarrolló todo su libro.

Para iniciar nuestro planteo debemos decir que los saqueos no empezaron el 14 de diciembre como afirma Auyero, sino el 13 y, lo que es fundamental de ello, es que ocurrieron en Mendoza, una provincia gobernada por el radicalismo y que duraron varios

días (siendo los barrios pobres de los municipios de Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz los más activos) (*La Nación*, 14 de diciembre de 2001; *Clarín*, 15 de diciembre de 2001; 16 de diciembre de 2001; *La Nación*, 17 de diciembre de 2001; 18 de diciembre de 2001). El siguiente lugar geográfico en sufrir los saqueos fue Entre Ríos, otra provincia gobernada por el radicalismo (*La Nación* 16 de diciembre de 2001). El tercer lugar fue sí una provincia peronista: Santa Fe, aunque debe ser destacado que el epicentro de los conflictos fue la ciudad de Rosario, la cual era gobernada por el Partido Socialista (que era integrante del partido de la Alianza) y que esa ciudad también había sido el epicentro de los saqueos de 1989 y los de 1990. Donde los supermercados sólo abrían si contaban con una fuerte custodia policial y al costo de haber decenas de heridos y detenidos —e incluso muertos—, puesto que todos los días cientos de personas rodearon muchos establecimientos en la ciudad (*Página 12*, 16 de diciembre de 2001). En Buenos Aires los primeros intentos de saqueos fueron el 18 y estuvieron encabezados por grupos piqueteros que reclamaron comida frente a la puerta de los supermercados y sólo unos pocos tuvieron éxito, ya que en la mayoría de los casos se lograron evitar (*Clarín*, 19 de diciembre de 2001). Recién el 19 de diciembre, seis días después de comenzados los saqueos en el interior del país, los saqueos irrumpieron masivamente en el conurbano bonaerense.

Pero lo que es incluso más llamativo de todo, y algo que Auyero parece desconocer fuertemente (al igual que la mayoría de la población argentina en general), es que los saqueos no terminaron el 22 de diciembre como se suele creer sino que continuaron durante todos los meses del año 2002 (con más de 150 saqueos y cuando ya el peronismo era gobierno nacional) y también en algunos momentos de 2003 (ver cuadro 1)⁴. Dichos saqueos ocurrieron tanto en provincias gobernadas por el radicalismo como también en aquellas gobernadas por el peronismo. Todavía más: durante 2002 y 2003 varios de esos saqueos se repitieron en los mismos municipios del conurbano bonaerense en los que ocurrieron los saqueos de diciembre del 2001, aun siendo municipios peronistas. Por lo

⁴ Ver la cobertura de algunos de esos saqueos en “Tres saqueos en el Conurbano y varios intentos en el interior” (*Clarín*, 29 de marzo de 2002); “Intento de saqueo en Entre Ríos y alerta sobre "zonas calientes"” (*Clarín*, 31 de marzo de 2002); “Córdoba: incidentes en un intento de saqueo” (*La Nación*, 10 de abril de 2002); “Volvieron los saqueos a comercios en Mendoza” (*La Nación*, 16 de junio de 2002); “Crecieron los saqueos en noviembre” (*La Nación*, 23 diciembre de 2002).

cual, todo esto representa un problema empírico central que la teoría de Auyero no parece poder explicar muy bien.

Cuadro 1
Saqueos mensuales de 2002 y el total de 2003

2002												2003
Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
30	8	13	7	3	25	5	7	2	6	39	6	14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nueva Mayoría (2002 y 2013)

Ordenando esta información, si contemplamos que los saqueos del 2001 ocurrieron en 15 de los 24 distritos del país, que también se mantuvieron una vez que el peronismo gobernara el país (sucediendo tanto en provincias y municipios en forma similar a los de 2001), y que no parecen haber fuertes diferencias entre lo ocurrido en territorios radicales, peronistas o de otro color político, se dificulta todavía más pensar que el único actor responsable de organizar todos los saqueos del país haya sido el peronismo. Si se toman las declaraciones judiciales de dos ministros de la Alianza que forman parte del expediente que investigó el supuesto complot contra el presidente De la Rúa, en ellas tanto Patricia Bullrich –ministra de Trabajo- como Domingo Cavallo –ministro de Economía- hacen fuertes acusaciones al radicalismo de haber estado detrás de las maniobras para sacar a De la Rúa del gobierno (incluyendo a Raúl Alfonsín, jefe del partido, como uno de los grandes operadores detrás de esto). El mismo presidente De la Rúa durante los meses de agosto y septiembre 2001 tuvo fuertes cruces con altos dirigentes de su partido por las acusaciones de complot que soltó en programas de televisión y en la prensa escrita en las que supuestamente se estaban tramando maniobras –junto a algunos sectores del peronismo- para armar un “gobierno de unidad radical-peronista” que reemplazara al vigente⁵.

⁵ Las declaraciones judiciales mencionadas y la disputa entre De la Rúa y su partido, así como un análisis con respecto a la dinámica del radicalismo durante el gobierno de la Alianza puede encontrarse en Zícarí (2016d).
185

Si bien hay acusaciones, realmente no hay pruebas ni lógica suficiente para decir que los saqueos estuvieron armados por el radicalismo. Pero tampoco para el caso del peronismo. Porque incluso cuando se habla de “El” peronismo del año 2001, es preciso recordar que el partido estaba muy lejos de ser un bloque homogéneo o de contar con un liderazgo claro y vertical que le hubiera permitido coordinar un plan a gran escala en todas las provincias. Si pensamos en las motivaciones políticas, por ejemplo, debemos decir que el sector liderado por Menem –que era el que presidía el PJ- buscó la continuidad del gobierno de la Alianza porque de caer éste rápido el menemismo no podría asumir inmediatamente, sino que tendría que esperar hasta 2003, por lo que habría que descartarlo. De hecho, Menem accedió públicamente a reunirse con De la Rúa en la Casa Rosa el 13 de diciembre (*La Nación*, 14 de diciembre de 2001) y fue prácticamente el único actor político que no sólo respaldó al gobierno abiertamente (algo que para esa altura ni siquiera la cúpula del radicalismo hacía), sino que llamó a garantizar la gobernabilidad con las Fuerzas Armadas (*Página 12*, 14 de diciembre de 2001). Si se busca en el poder del peronismo bonaerense del tándem Ruckauf-Duhalde, que generalmente suelen ser acusados como los verdaderos responsables de los saqueos, debe tenerse presente que estaban muy aislados políticamente dentro del partido ya que, a su enfrentamiento clásico con los sectores del menemismo, debería de sumarse el que registraban con el llamado “Frente Federal” que conformaban los once gobernadores de las provincias “chicas” del partido y que buscó desesperadamente evitar la concentración del poder en dicho tándem. Lo mismo que los gobernadores de las provincias “grandes” del peronismo, puesto que ni Reutemann (Santa Fe) ni De la Sota (Córdoba) estaban alineados con Duhalde, sino al contrario (Azardum, 2004; Zícarí, 2012; 2016c; 2018b). Por todo esto, la maquinaria partidaria del conurbano bonaerense no podría haber logrado de ningún modo por sí sola un alcance nacional como para que se produjeran tantos saqueos en lugares múltiples del país durante tanto tiempo (el número de saqueos registrados en diciembre de 2001 van desde los 261 presentados por Auyero hasta los 875 reconocidos por el equipo de Nueva Mayoría, pasando por los 584 que exponen tanto Iñigo Carrera y Cotarelo como Gordillo)⁶. Como indicó el senador peronista Antonio Cafiero: “la renuncia de De la Rúa perjudicó seriamente al justicialismo

⁶ Auyero en un trabajo previo (2006: 359) había hablado de 289 saqueos totales, de los cuales sólo el 33% (96 saqueos) ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.

pues lo encontró desorganizado” (causa 348/2002, foja 4969), y por lo tanto débil para hacerse cargo del país como efectivamente padeció Duhalde poco después.

Yendo todavía más lejos, habría que agregar que, como la crisis argentina fue tan profunda y su economía se derrumbó un 20% durante los años 2001 y 2002, los países vecinos y socios comerciales más directos del país también sufrieron los coletazos. Así, en la República Oriental del Uruguay comenzaron a haber saqueos en varios distritos (*Clarín*, 1 de agosto de 2002) y también este país tuvo su propio “corralito” (*La Nación*, 2 de agosto de 2002). Auyero recuerda también que por la misma época hubo saqueos en Brasil, Venezuela, Perú y Bolivia. Parecería que con esta información ya es ciertamente ridículo no sólo acusar al peronismo de los saqueos ocurridos en otros países del continente, sino también de todos los saqueos del país. Tal cosa es realmente insostenible. En consecuencia, debe quedar totalmente descartada la idea de que hubo un único actor que hubiera digitado centralizadamente todas las explosiones (inclusive los saqueos) que se estaban dando por el vasto territorio nacional.

Pero todavía hay más. Auyero en su libro cita al historiador británico marxista E.P. Thompson para recurrir a la crítica que éste hace a las visiones que dan una “visión espasmódica” de las revueltas populares, como si éstas emergieran desde la nada. Pero en el planteo de Auyero, al contrario de lo que dice, parece promover un estudio de “relaciones sin relación” ya que el contexto histórico, económico o político está totalmente desdibujado, siendo inexistente. Por ejemplo, no habla del sumo desprestigio en el cual había caído el gobierno de la Alianza durante su breve gestión, no menciona la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez por las sospechas de sobornos pagados por ese mismo gobierno, increíblemente no menciona la llamada “ley de déficit cero” (por la que el gobierno aplicó un ajuste descomunal en jubilaciones, pensiones y salarios estatales pocos meses antes de los saqueos, en julio de 2001) ni que señale que la Alianza realizó ocho ajustes del gasto estatal en apenas dos años de gobierno⁷, siendo todavía más increíble que tampoco mencione el fenómeno del “voto bronca” producido en las elecciones de octubre

⁷ Un repaso de las medidas de ajuste puede consultarse en Zicari (2014a).

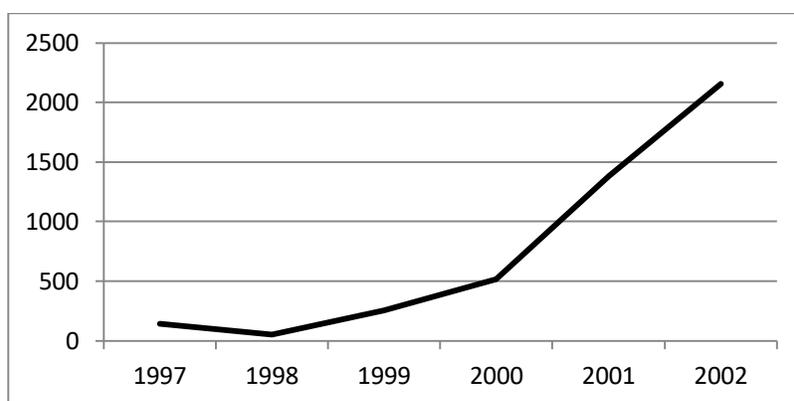
de 2001 (en las que el ausentismo, la impugnación de votos y la oposición se impusieron en todo el país), como tampoco hable del corralito (en todo el libro ni siquiera aparece la palabra) y que fue un componente fundamental para entender los sucesos de diciembre.

Otro hecho que no tiene en cuenta Auyero es que el mismo día en que comenzaron los saqueos en Mendoza (el 13 de diciembre), se estaba produciendo en todo el país un paro general promovido por las tres centrales sindicales que existían en aquél entonces (la CGT “oficial” que Rodolfo Daer liderada, la CGT “rebelde” conducida por Hugo Moyano y la CTA) (*Página 12*, 14 de diciembre de 2001). Es más, el paro general y la demanda de las bases fue tan alta –ya que la situación económica y política era sumamente crítica- que los líderes gremiales llamaron a otro paro general para el 20 de diciembre. Sin embargo, con ánimos sociales tan caldeados, con incidentes en prácticamente todas las provincias del país (que implicaron violentos enfrentamientos con la policía, incendios de autos, reclamos de tierras por parte de comunidades indígenas, huevazos contra políticos, bombas contra los bancos, protestas de trabajadores estatales, movilizaciones de productores frutihortícolas, reclamos de pequeños comerciantes, piquetes de desocupados, luchas y confrontaciones sumamente desbordantes, asambleas y protestas de todo tipo, amén los saqueos que empezaban a producirse en el interior) los líderes gremiales suspendieron el nuevo paro general por temor a no poder contener a las multitudes y que las movilizaciones desembocaran en hechos extremos de imprevisibles consecuencias (*La Nación*, 15 de diciembre de 2001). Ningún sindicalista quería ser responsabilizado de lo que pudiera pasar por esos días dado el clima de protesta y furia generalizada.

A su vez, para explicar “explosiones” como las de diciembre de 2001, no sólo habría que tener presente que la lucha social creció a toda velocidad a lo largo de todo ese año, sino que ello era un fenómeno que arrastraba varios años de crecimiento con piquetes, huelgas, cacerolazos, manifestaciones, actos de rebelión y protestas múltiples (ver Gráfico 1 y Gráfico 2). Por ello mismo, si descartamos que pudiera haber algún gran actor central que pudiera haber orquestado todos los saqueos del 2001 y del 2002 (ya sea eliminando al peronismo, su maquinaria, el radicalismo o algún otro partido o agente) y agregamos un

poco de perspectiva histórica y social, la dinámica parece ser más clara. Durante el 2001 fue una situación de emergencia alimentaria crecientemente aguda, en la cual durante todo el año cayó el consumo de alimentos esenciales como la leche, el arroz o los fideos. La economía se desplomó, bajaron los salarios, hubo múltiples recortes del gasto, se derrumbó el consumo, el desempleo tuvo un alza espectacular acompañado de un fuerte aumento de la pobreza y la indigencia. Entonces, si sumamos los componentes históricos, los ciclos de luchas previos, la situación económica y política, contextualizando todo, parecería que los saqueos no fueron ni más ni menos que una forma de movilización y de protesta más de todo este proceso. La cual no parece tener un dueño o agente único capaz de controlarla o provocarla⁸.

Gráfico 1 **Evolución de los cortes de ruta anuales (1997-2002)**

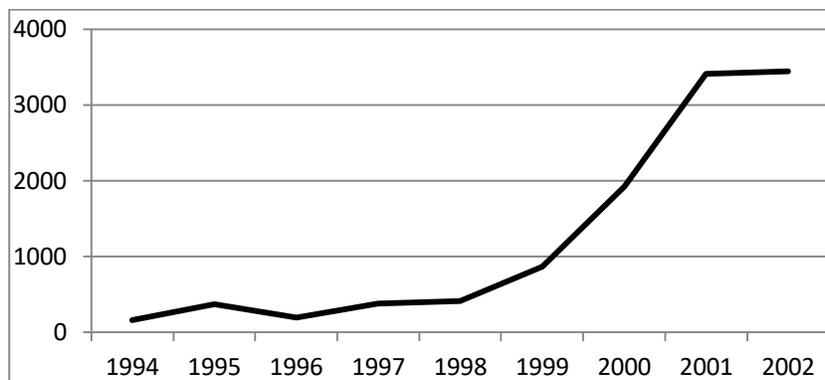


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Nueva Mayoría (2001; 2003).

⁸ Auyero (2007) critica por considerarla demasiado genérica la calificación de “los disturbios del FMI” cuando se habla de todos los saqueos y revueltas que hubo en los países latinoamericanos como producto de las políticas neoliberales que el FMI promovió (p. 198). Las cuales en todos los países terminaron por generar las mismas y funestas consecuencias: aumento del desempleo, suba de la pobreza, caída de salarios, flexibilización laboral, reducción del consumo y demás padeceres, los cuales dan bastante sentido a pensar dichas revueltas y saqueos en función del recetario neoliberal del FMI. Empero, Auyero con su extremo particularismo termina por negar prácticamente la lógica histórica y descontextualizar los sucesos.

Gráfico 2

Jornadas de protesta y rebelión (1994-2002)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Iñigo Carrera (2009, p.181).

En el libro que compilaron Di Meglio y Serulnikow (2017) sobre la historia de los saqueos en la Argentina, no sólo estos recuerdan en su introducción que los saqueos tienen una larguísima tradición en la historia del país (tuvieron lugar prácticamente desde la independencia), sino que fueron una práctica social “en disponibilidad” inscrita en la memoria popular. La cual no necesariamente la vuelve un hecho rutinario, sino una posibilidad latente dentro de un repertorio de protesta y de acción social como pueden ser los cacerolazos, los piquetes o cualquier otro. Los saqueos en muchas ocasiones fueron una forma de catarsis social o de poner en cuestionamiento violentamente las relaciones de poder vigentes. Por ejemplo, durante las guerras de independencia la penetración de los valores republicanos contribuyó a horadar las jerarquías estamentales y las relaciones de deferencia propias de la sociedad colonial, despertando ciertos *ethos* igualitarista y democrático que sacudió las formas de dominio tradicional. Así, aquellos saqueos fueron una forma más de expresión en este proceso. Con ello, se ilustra que un realista perjudicado por el aumento de los antagonismos sociales de aquella época, expresados en parte en los saqueos, se quejaba ante la corte lusitana para pedir su intervención diciendo: “El dogma de la igualdad agita a la multitud contra todo gobierno, y ha establecido una guerra entre el Pobre y el Rico, el amo, y el Señor, el que manda y el que obedece” (citado en Fradkin, 2017, p. 29).

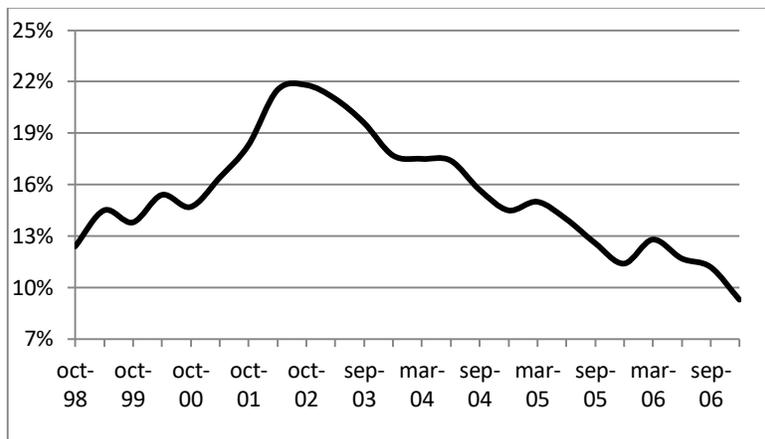
Siguiendo un relato como el de Osona (2013) sobre cómo funcionaron los asentamientos de tierras al sur del conurbano bonaerense al finalizar el siglo XX y comenzar el siguiente, relato que se inscribe en una clave casi gansteril y sumamente verticalista (entre “punteros, malandras y porongas”), dichos operadores territoriales nos informan que durante diciembre de 2001 no podían controlar a la mayoría de los pobladores del lugar y sus demandas de pasar a la acción. Los más humildes presionaron muchísimo para que se realizaran los saqueos a medida que el nerviosismo aumentó en diciembre, especialmente una vez los saqueos comenzaron en el interior del país. Allí, los punteros peronistas debieron actuar a la apurada, en parte porque dadas esas circunstancias el saqueo ya se había vuelto inevitable en el lugar “en un hervidero de gente premovilizada esperando algún tipo de directiva”. Además, los mencionados punteros y porongas temían ser desbordados o que grupos de piqueteros y militantes de izquierda fueran los que encabezaran los sucesos (ganando entonces estos el “prestigio” de hacer lo que casi todo el barrio reclamaba). En consecuencia, los punteros debieron liderar los saqueos, pero no los organizaron ni crearon la “oportunidad” para que ocurran, sino que principalmente los gestionaron tratando de darle algún tipo de encuadre o forma. A su vez, una vez iniciados los saqueos, tampoco pudieron calmar a sus bases, ya que debieron realizar muchos más saqueos de los deseados por ellos mismos y que la “repartija” fuera más horizontal (Osona 2014: 2017; Di Meglio y Serulnikow, 2017). También en el libro de Auyero (2007) hay varias citas en donde se muestra que los saqueos son provocados, gestionados y negociados por las muchedumbres mismas sin la presencia de ningún puntero (por ejemplo, p. 122, 123, 133).

Los sectores populares parecen ser entonces los auténticos protagonistas de los saqueos de aquellos años, sin haber dependido de ningún puntero o maquinaria política para activarlos, movilizarlos o realizar la acción colectiva. Porque debemos recordar que los saqueos, además de una práctica social, fueron también una expresión política: fueron formas de catarsis y de purificación de contextos políticos extremos, movimientos sonoros que difícilmente pudieran pasar desapercibidos, que forzaron a la conmoción y a obtener respuestas rápidas, interpelando de manera directa a las autoridades. Ellos manifestaron que

la disciplina social más básica se estaba quebrando, generando notorias fisuras en el orden social instituido. Es decir, fueron una expresión política más de que la situación de crisis en el país durante el 2001 era altísima.

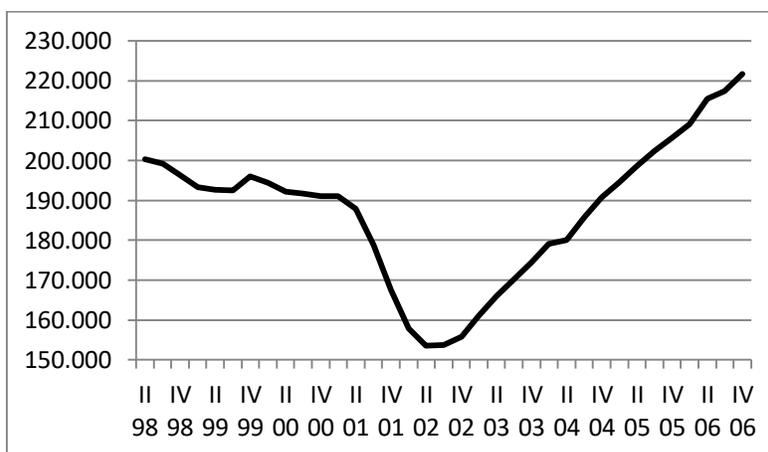
Sumemos además las consecuencias más palpables con respecto a lo sucedido. Luego de las movilizaciones, saqueos y ciclos de protesta cuyos puntos más agudos fueron los años 2001-2002, y que dieron cuenta que el agrietamiento de los marcos de funcionamiento social estaban siendo carcomidos, en poco tiempo se instauró un inmenso programa de ayuda social para Jefas y Jefes de hogar desocupados con hijos a su cargo que llegó a millones de personas, la política tuvo cambios (renovando por ejemplo la Corte Suprema de Justicia y reinstalando los juicios por la memoria), el desempleo comenzó a descender aceleradamente (Gráfico 3), se recuperó el consumo (Gráfico 4), mejoraron los salarios (Gráfico 5) y la pobreza y la indigencia se redujeron (Gráfico 6). Es decir, ante el desborde social descripto, los sectores de la dirigencia política comprendieron que ya no contaban con mayores márgenes ni tiempo para poner en marcha otras medidas que contuvieran a la población, tomaron nota de la situación de ebullición, y aún con conflictos, zigzagueos y contradicciones, la situación económica, social y política tuvo notorias mejoras. No podemos desconectar estos aspectos para analizar el periodo y su dinámica siguiente: más allá de que la relación no sea totalmente lineal, acciones sociales tan agudas como los saqueos (y no sólo ellos, sino también otras formas de protesta y movilización) generaron efectos políticos claros que posteriormente, en el corto y largo plazo, hicieron mejorar el nivel de vida de los sectores populares.

Gráfico 3
Nivel de desempleo (octubre 1998- diciembre 2006)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Economía.

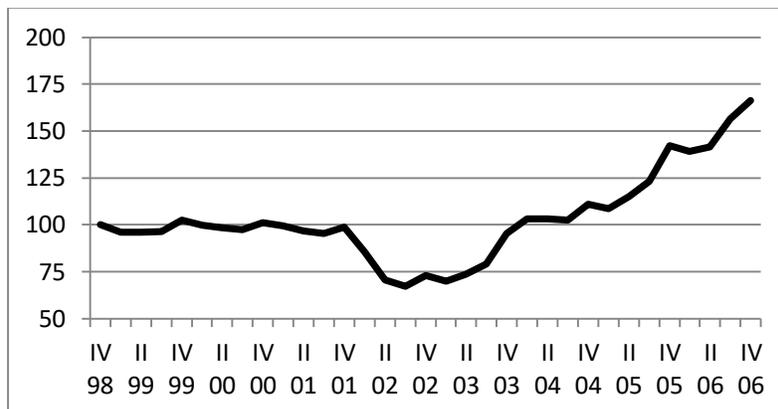
Gráfico 4
Consumo trimestral del sector privado (II: 1998- IV: 2006) (en millones de pesos de 1993)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Economía.

Gráfico 5

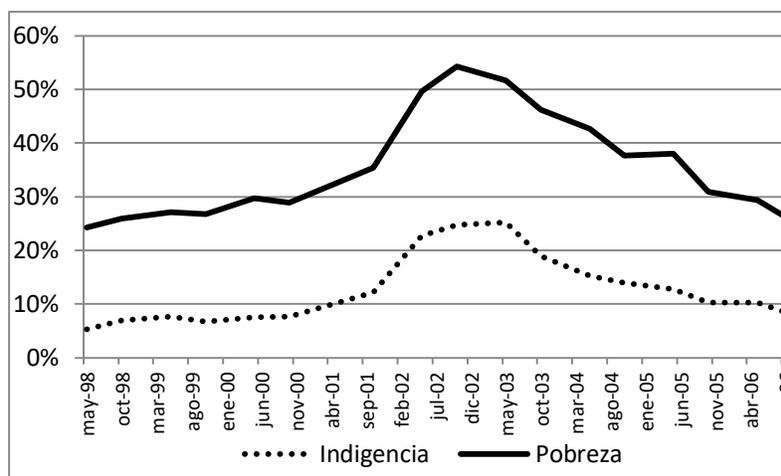
Índice trimestral del salario obrero de la industria manufacturera ajustado por inflación (IV: 1998- IV: 2006)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Economía.

Gráfico 6

Pobreza e indigencia en el Gran Buenos Aires (1998-2006)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de Economía.

Observando los gráficos es fácil notar claros quiebres en las dinámicas económicas y sociales, en los que con la irrupción de la lucha popular no sólo se detuvieron las tendencias negativas, sino que todas ellas sufrieron un punto de quiebre y pasaron a mejorar. Estos

elementos, aun para quienes defienden las teorías de la orquestación, deberían llevarlos a reconsiderar el concepto liso de la pura “manipulación” o “engaño para dominarlas” de las clases subalternas. Como nos recordaron Murmis y Portantiero (1971) en sus análisis sobre los orígenes del peronismo en el que, frente a aquellos académicos que decían que los trabajadores sólo apoyaron el ascenso de Perón por elementos emocionales, sin ningún viso de racionalidad, y que eran abiertamente manipulados por éste, era necesario recordar que los trabajadores obtenían ventajas concretas innegables durante dicho proceso de ascenso. Por lo que, si los obreros actuaron directamente en su propio beneficio al apoyar a Perón, entonces no parece ser lógico decir que fueron “utilizados” sino que sus compartimientos eran de pleno derecho y motivacionalmente claros.

Por supuesto, las intervenciones de 1945 y las del 2001 no son exactamente iguales, por lo menos por tres motivos. El primero es que en 1945 existía un actor político bastante delimitado –las masas obreras sindicalizadas- mientras que en 2001 dicho actor es más impreciso, se encuentra difuminado y fue múltiple, siendo más difícil de categorizar, como a la vez –otra gran diferencia- las intervenciones se realizaron con demandas heterogéneas en 2001 y no de manera tan orgánica como podría haber sido el clásico programa obrerista que el sindicalismo defendió en 1945. Por último, no pareció haber un momento de “decisión” o premeditación plenamente consciente, centralizado en parte por los sectores gremiales, como lo fue el arresto de Perón en 1945 que volcó la situación a favor de la intervención, aunque ambos contextos (tanto octubre de 1945 como diciembre de 2001) fueron sí situaciones propicias que alentaran a la movilización activa. Estas diferencias sin dudas complejizan el rol tanto del sujeto, la unidad de sus objetivos, como la articulación de las acciones en gran escala con vistas al 2001. Igualmente estas diferencias, y más allá de ellas, nos permiten afirmar que todas las formas de intervención del 2001 – especialmente luego del “voto bronca” de octubre y del “corralito” de diciembre- tenían en el horizonte cierta cuota de denuncia, de queja y de protesta, entrelazadas por un mismo diagnóstico común de percibir aquella dinámica como de crisis y de malestar en la cual las autoridades –De la Rúa, Cavallo y los “políticos” en general- no eran parte de la solución, sino el eje del problema, por lo cual era necesario así pasar a la acción.

Pero entonces, ¿cómo operaron los saqueos? ¿cómo nacieron? ¿cómo fue posible lograr tal nivel de coordinación? No hay una respuesta única. Pero lo cierto es que ciertas prácticas se inscriben en la memoria y dejan una huella, volviéndose en el futuro una opción o herramienta más dentro de los repertorios de las formas de acción. Estas huellas y cómo desarrollarlas se “aprenden” en las sociedades de las cuales emergen. Por ejemplo, cuando en la Capital Federal se quiere festejar un logro deportivo, todo el mundo sabe que debe movilizarse al Obelisco. Las manifestaciones políticas tienen su epicentro inmediato en la Plaza de Mayo. ¿Acaso quién les dijo a las miles de personas que se movilizaron luego de que De la Rúa decretara el estado de sitio a dónde tenían que dirigirse para protestar? Ya lo sabían. Cada ciudad, cada municipio tiene sus lugares históricos de referencia para estas situaciones. En los saqueos hay huellas que pueden ponerse en funcionamiento para ir a los lugares a donde es contextualmente lógico esperar que haya grandes concentraciones y también cómo actuar al respecto. Ni las corridas bancarias del 2001 (ni la mayoría de las existentes en otras partes del mundo) fueron “organizadas” por un comité clandestino, sino que responden más bien a lógicas situacionales propias. Por ejemplo, en el mundo financiero suelen operar lógicas por parte de sus agentes donde buscar anticipar el comportamiento colectivo, muy ligadas a los esquemas de expectativas autovalidadas. Así, el virtual triunfo de un candidato señalado como “antimercado”, por más que un inversor realmente no le tema, éste comprará dólares, fugará activos, venderá bonos estatales y maniobras similares porque “sabe” que el resto de los agentes del mercado va a reaccionar de ese modo. Por lo que se produce un comportamiento en manada, entendible, sin necesidad de recurrir a manos oscuras. Con respecto al corralito, la solución más simple y conocida es suficiente: dada la dinámica que había asumido la estructura económica argentina bajo el esquema de la convertibilidad –con un déficit comercial, fiscal y financiero inmanejable y pocas reservas en el Banco Central para asumir tantos compromisos en un sistema de tipo de cambio fijo-, que existieran las corridas bancarias y luego el corralito parece más fácil de entender puesto en perspectiva contextual que recurrir a oscuros intereses capaces de generar tales acciones (Zícari, 2014c; 2018a). Por lo cual, así como no hubo orquestación ni un comité central clandestino para que ocurra

el “saqueo desde arriba” –el corralito- tampoco la hubo para que ocurra el “saqueo desde abajo”.

En mi opinión, porque por más que existan intereses oscuros (y ciertamente ellos existen) no es suficiente para explicar sucesos como los del 2001. Como falló el tribunal judicial que investigó el supuesto complot contra De la Rúa: con la evidencia recogida (sentenció el tribunal), parece que, de haber existido un complot, fue un complot de toda la sociedad argentina contra su presidente:

[En] un ejercicio mínimo de memoria, resulta imposible considerar que los ciudadanos de un país de las dimensiones de la República Argentina hayan decidido complotarse en contra de un gobierno en un contexto social como el relatado precedentemente. Pretender argumentar lo contrario, dejando de lado los negativos resultados de las políticas económicas diseñadas, la desocupación reinante, el malestar que dichas circunstancias conllevan en un contexto generalizado, junto a los problemas sociales de base cuyo origen databa de tiempo atrás a diciembre de 2001, importaría negar la realidad [...] lo ocurrido fue una crisis social generalizada y no fruto de una maniobra delictiva organizada (Fallo resolutorio de la causa 348/2002, fojas 47y 63).

A su vez, en el fallo se insiste en que, De la Rúa, tal como obliga la ley, recibía en su propia mano todos los días informes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la cual durante su presidencia sistemáticamente le informaban del aumento de la conflictividad social en el país. Empero, el gobierno no hizo nada al respecto, sino que recrudesció las políticas de ajuste en el Estado e incluso continuó asilándose políticamente todavía más (los informes de inteligencia citados se titulaban “grado de tensión social en las provincias” y se reproducen los de octubre, noviembre y diciembre de 2001). Así, se comenta:

Junto con la conflictividad social existente de cada región [del país], la Secretaría de Inteligencia llevaba a cabo una descripción narrada de los principales eventos del día y hechos que formaban parte de [la] “conflictividad estructural”. Ejemplifican este despliegue de información, las nóminas de marchas a lo largo y ancho del país en relación con las protestas llevadas a cabo por diferentes sectores de empleados públicos nacionales y provinciales que se oponían al pago de sueldos por medio de

cuasi monedas, la instalación de la carpa blanca docente frente al Congreso Nacional y la organización en varias ciudades del interior del país de ollas populares (Fallo resolutorio de la causa 348/2002, fojas 41 y 42).

Podemos discutir largamente si hubo más saqueos a negocios pequeños que aquellos pertenecientes a las grandes cadenas por una cuestión de logística, de comodidad, de revanchas internas, cercanías, por la diferencial forma de protección de la policía o por otros motivos. Pero lo que no se puede hacer, como hace Auyero (2007) en su introducción, es decir que las grandes cadenas de supermercado estuvieron “llamativamente ausentes de la lista de negocios saqueados” (p. 24-25), ya que en la base muestral que él mismo presenta, 92 casos (el 35% del total de los negocios) perteneció a esas grandes cadenas (p. 206 y 108). Es decir, miente deliberadamente sólo para generar sospechas y la sensación de que hubo orquestación e intereses oscuros⁹.

Es indudable el protagonismo y la fuerza popular durante las jornadas de diciembre. ¿Es posible pensar que muchas personas arriesgaron su vida aquellos días simplemente porque un puntero se los dijo? ¿es tan fácil como sugiere Auyero movilizar a miles de personas para que actúen de determinado modo, como si fueran arrastradas como huestes o casi ganado, sin voluntad propia? Los saqueos no siempre significan lo mismo en la historia ni implican las mismas consecuencias. Por ejemplo, Menem tuvo saqueos en enero y febrero de 1990, aun en provincias gobernadas por el peronismo, y eso no implicó el fin de presidencia, sino al contrario: terminó gobernando durante más de 10 años. Tampoco nadie sospechó de un complot en su contra o que fueron los punteros partidarios orquestándolo todo. Hubo saqueos cuando cayó Rosas (1852) e Yrigoyen (1930), pero sólo después de sus caídas y no antes. Con Perón hubo antes de su caída (en abril de 1953 y en junio de 1955) y también después de su derrocamiento (los más intensos fueron en septiembre de 1955). Lo mismo sucedió con Alfonsín y De la Rúa, que hubo antes y después de sus caídas¹⁰. En los

⁹ Según el relevamiento de Iñigo Carrera y Cotarelo (2006, p. 64) durante los primeros días los saqueos se dan mayoritaria o exclusivamente en las grandes cadenas de supermercados, aunque transcurridos los días los negocios más pequeños comenzaron a ganar protagonismo como objetivos.

¹⁰ Es notorio que los saqueos ocurridos durante el gobierno de Alfonsín algunas veces también quieran atribuir al peronismo esos saqueos, cuando la fundamentación política también luce muy débil: los saqueos comenzaron 10 días después de las elecciones presidenciales, cuando el peronismo ya había triunfado, por lo

saqueos del Santiagazo de 1993 no cayó ningún presidente, sino que hubo una intervención provincial que hizo deponer al gobernador peronista en las que el peronismo históricamente manejó todos los hilos de la provincia, lo que hace imposible hablar de orquestación. En Córdoba (junio-julio de 1995) y Río Negro (septiembre-octubre de 1995) también hubo saqueos a comercios, pero no cayeron sus gobernadores, sino que incluso ese mismo año los oficialismos lograron retener las provincias en elecciones limpias. El historiador italiano Carlo Ginzburg (2004), al analizar un saqueo ocurrido en Roma en el año 1559, señala que en éste persistían elementos que no sólo se venían repitiendo desde varios siglos atrás, sino incluso de miles de años (puesto que ya existían en la antigua Babilonia, Grecia y Roma), con ciertos aspectos rituales –también de tradición y de derecho consuetudinario-, que volvían a los saqueos una práctica de acción con múltiples sentidos a lo largo de la historia en Occidente, ligada fuertemente a los “ritos de pasaje”, de destrucción-regeneración, durante las transiciones políticas y las incertidumbres reinantes en determinados periodos: la muerte de un rey, el deceso de un papa o el cambio de un gobierno. De allí, como nunca los saqueos significan exactamente lo mismo, es fundamental que sean significados a partir de su contexto propio de enunciación: contextualizar es interpretarlos. Por lo tanto, que los saqueos hayan ocurrido en un ciclo masivo de protesta popular como el 2001 y 2002 parecer ubicar a los mismos como una práctica más de los conflictos de ese tiempo que la simple orquestación maquiavélica: la acumulación de tensiones latentes, el colapso económico, los ajustes permanentes del gasto, la crisis alimentaria, el malestar social y demás.

En el fallo resolutorio (2002) antes citado, figura la declaración de Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados Coto, ante el tribunal en la que dice: “tres meses antes de los saqueos ya la gente comenzaba a reunirse en las afueras de los supermercados a la espera de que le entregue comida y que esa gente se fue incrementando con el paso del tiempo [...] Los días previos a los saqueos estábamos prevenidos de la situación generada a raíz de los continuos pedidos de la gente que habitualmente venía a pedir comida” (foja 31).

que al partido –más precisamente a Menem- no le hubiera “convenido” tener una sociedad tan convulsionada poco antes de asumir. A su vez, los saqueos comenzaron en Córdoba (un distrito radical) y en Rosario (un distrito peronista).

Auyero (2007) cita testimonios similares, cuando varios saqueadores no paraban de hablar de los recortes en el Estado, los atrasos recurrentes en los pagos y la interrupción de los planes sociales: “Se suponía que lo iban a pagar a fin de mes [al plan social] y no lo hicieron. Fijaban una fecha, y luego otra. La navidad se estaba acercando y [...] bueno, entonces se produjeron los saqueos” (p. 132); otra persona: “Nos daban subsidios [de desempleo], y luego los cortaron. Nos daban bolsas de alimentos, pero de golpe dejaron de entregarlas. Así nadie aguanta” (p. 133). Un adolescente que había saqueado comentó: “Yo estaba en la escuela, y mis compañeros de clase y amigos estaban hablando de los saqueos antes de que comenzara todo” (*Página 12*, 20 de diciembre de 2001), también citado por Auyero, p. 133). Por su parte, las tensiones territoriales y los temores a los saqueos venían agudizándose desde mayo y junio de 2001¹¹. Sin embargo, esta información y los testimonios no son incorporados al corazón del esquema explicativo de Auyero, donde sólo se hace hincapié en el supuesto complot partidario y los punteros.

Es posible detenerse en los daños materiales que generaron los saqueos y el tipo de delitos que implicaron. Sin dudas son aspectos no menores del fenómeno. Empero concentrarnos sólo en eso deja de lado dos puntos. El primero es que con hacer eso simplemente se destaca lo más obvio de lo que implica un saqueo. El segundo es todavía más importante de señalar, puesto que si nos concentramos sólo en el aspecto delictual o el del daño material de los saqueos, perdemos de vista que prácticamente todas las protestas implican ello mismo: tomar una fábrica afecta la producción y pone en cuestión los derechos legales del dueño de tener en producción su establecimiento, realizar un piquete corta el tránsito –algo en alguna medida ilegal- y afecta económicamente a muchas personas, las manifestaciones de los ahorristas durante 2002 contra los bancos –rompiéndolos, insultando al personal o amenazando físicamente- también implicaron delito y daño económico. Prácticamente todos los actos de protesta inherentemente lo hacen porque muchas veces esa es, precisamente, la finalidad de la protesta: desafiar un orden social, afectar un sistema económico que se denuncia y hacerse notar, dado que cuánta

¹¹ Ver por ejemplo “Problemas provinciales para pagar sueldos” (*Clarín*, 26 de mayo de 2001), “Intendentes del PJ están preocupados” (*Clarín*, 29 de mayo de 2001), “De la Rúa y Ruckauf, en alerta por la crisis social” (*Clarín*, 22 de junio de 2001), “El saqueo que nunca se produjo” (*Clarín*, 24 de junio de 2001).

mayor sea la capacidad de perturbar la política y la economía, mayor capacidad de presión –y por ende de fortaleza- tendrá la protesta para negociar y ganar influjo. Además, no todos los saqueos tuvieron como finalidad el simple “robar” en aquél contexto. Recuerdo un caso que vi en directo por televisión en enero de 2002, de un saqueo a un local Musimundo en pleno centro de la Capital Federal (en avenida Corrientes y avenida Callao), donde muchos participantes sacaban equipos a la calle y los rompían o prendían fuego, destruyéndolos totalmente. La situación que más me quedó registrada es que una persona entró al local, sacó un gran televisor y lo quiso subir a un taxi para llevárselo, a lo que muchos de los que estaban en el local lo persiguieron: ante esto, el primero dejó el televisor en el suelo y huyó aterrado. Los que lo persiguieron procedieron a destruir el televisor, como advirtiendo al resto: “una cosa es saquear y destruir y una muy distinta es robar” (en los saqueos a las casas de Yrigoyen y Perón también se actuó parecido: estaba bien saquear, pero no robar). Esas acciones en el Musimundo claramente no tuvieron como finalidad “robar” o apropiarse de los objetos, aunque de hecho lo hicieran, sino tan sólo demostrar el descontento y la furia ciudadana que se vivía por aquellos días: querían llamar la atención de las autoridades, presionarlas. Fue una intervención decidida de expresión política hacer ese saqueo: una forma de protesta. Por lo que su acción y los riesgos de realizarla no pueden inscribirse en el simple cálculo racional de costo/beneficio/apropiación.

Los testimonios recolectados por Blasco (2004) de los alumnos de una escuela secundaria del partido de Moreno con posterioridad a los saqueos de 2001, destacan que para esos chicos ir a saquear no es lo mismo que ir a robar: “No es lo mismo porque se junta toda la gente, se juntan todos... cuando uno va a robar va solo o vas con uno o dos”. Otros explicaban otras diferencias: “Vos vas al saqueo y saqueas para comer, y para robar, robás y lo vendés”. Señalando: “Después se comía... en mi casa, en casa de mi hermano, todo... hicimos fiesta, pero no regalamos porque todo el barrio tenía”. Para ellos, entonces, saquear es una forma de acción colectiva, de carácter barrial y donde ellos pueden ser protagonistas (Fradkin, 2017, p 42). Como además, para los sectores que se movilizaban estaba también la concepción de que la comida para los hijos es un principio de justicia

básico y que la alimentación era entonces un derecho social inalienable que otorgaba legitimidad a su accionar¹².

Es que Auyero cuando intenta “describir” la realidad que dice ver, olvida también que sus categorías para narrarla –tales como “clientelismo”, “punteros”, “aparato”, “política clandestina”- son tanto enunciados conceptuales como etiquetas morales, con una carga ideológica negativa sobre la política territorial (Vommaro, 2008). Quizás a una misma persona dentro de un barrio humilde se la pueda llamar indistintamente como “puntero”, “operador partidario”, “mediador estatal”, “funcionario informal”, “activista político”, “militante social”, “vecino comprometido”, “líder barrial”, “jefe de barra”, “facilitador de bienes y soluciones”, “referente territorial” o “agente mafioso”. Cada una de estas denominaciones implica una comunidad de valores y apreciaciones éticas que no podemos desconocer que estamos construyendo con nuestras palabras. Por lo que hay un uso abusivo de la etiqueta/concepto “clientelismo” en la que toda forma de organización popular cae en esto. A propósito de este punto, un gobernador de la provincia de Buenos Aires –Felipe Solá- se quejaba del trato diferencial de la terminología que recibían ciertas prácticas entre la Capital y el conurbano: “En la Capital existen las estructuras políticas, en el conurbano, en cambio, se habla del aparato. El porteño es un ciudadano que va a un acto; el bonaerense es un cliente político. Ésas son actitudes discriminatorias” (*La Nación* 23 de junio de 2003 cit. en Vommaro y Quirós, 2011); un intendente se quejó igual: “Para los medios el conurbano es una tierra de animales, vieron, y nosotros, los intendentes, los monstruos que dirigen esos animales” (Vommaro y Quirós, 2011). Por su parte, esas mismas redes informales de los barrios pobres, y que tantos atributos negativos reciben en sus caracterizaciones, a veces sólo reducidas al mote de “redes clientelares”, son también las que permitieron emerger tiempo después en algunos casos a las cooperativas, los clubes de trueque, las asambleas barriales, los comedores escolares, los grupos de militantes y que canalizaron el compromiso social activo en sus barrios. Los pobres no habitan una “desertificación organizativa” que sólo los deja “merced a los punteros” como sugiere Auyero, muchas veces estigmatizándolos, desmereciendo su capacidad de empoderamiento

¹² En este sentido, así como la prensa hablaba del corralito como el “saqueos de arriba”, también se invertían los términos al señalar que el alimento era el “corralito de los pobres”.

y trazando una diferenciación espuria entre una “alta” y una “baja” forma de hacer política (Frederic, 2004; Vommaro, 2008). A su vez, aunque a veces Auyero intente quebrar la ecuación “peronismo = clientelismo”, como si fuera un tipo de relación exclusiva de este partido, la tendencia general en sus análisis es más bien a confirmarla, arrastrando así otra clases de sesgos, dogmas y estereotipos¹³.

El mundo de la vida popular, en los sectores y barrios más carenciados, con la informalidad y precariedad institucional que suelen padecer, a veces hace muy difícil organizarlos, con lo que sus vínculos con el estado, la política y los partidos crean fronteras de difícil comprensión y categorización¹⁴. Por ello, recuperando un cuestionamiento que ya varios especialistas le han realizado a Auyero, podemos volver a preguntarnos con ellos: ¿habría para Auyero “política de los pobres” más allá (de la zona gris) del clientelismo? (Masson, 2002; Vommaro, 2008; Quirós, 2008). Por los tipos de planteos que realiza este autor (y otros tantos como él), la respuesta muchas veces (aunque no siempre) parece ser clara: los pobres no se organizan según su propio ímpetu y credo, no tienen ideologías, debates ni disputas internas o externas con otros grupos, los valores sociales o el compromiso político les es ajeno, mientras que son sólo víctimas, “ganado” o una “masa en disponibilidad” para usar la clásica expresión de Germani (1957) que otros sectores o grupos aprovechan. Nos podríamos preguntar si es que los pobres son únicamente presos de esas redes, si el manejo que se hace de ello es automático o si hay en cambio otros elementos a explorar: Auyero habla con consideración cuando lo pobres son casos aislados

¹³ Por ejemplo, Auyero podría haber mencionado que los saqueos comenzaron en las provincias gobernadas por el radicalismo. También podría haber analizado otros municipios por fuera de los controlados por el peronismo para intentar contrastar sus tesis centrales, ya que los saqueos ocurrieron tanto en municipios del conurbano bonaerense históricamente controlados por el PJ (como La Matanza) como de aquellos históricamente controlados por el radicalismo (como San Isidro). Por último, no está de más recordar que los saqueos ocurrieron en 6 de los 8 distritos controlados por la Alianza: Capital Federal, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, San Juan y Río Negro. Aparentemente Catamarca y Chubut fueron las únicas provincias radicales en las que no hubo saqueos.

¹⁴ Es interesante la experiencia ocurrida durante 2001 y 2002 en el municipio de Morón, en el conurbano bonaerense, donde una ONG dedicada a luchar contra el clientelismo, en acuerdo con el intendente local, hizo varias intervenciones para transparentar la asignación de recursos y su supuesta utilización política. Tras poner urnas para recibir denuncias, acercarse a los barrios e investigar por todos lados nunca encontraron una sola prueba de, por ejemplo, distribución espuria de planes sociales o de manejos y manipulaciones como los que, aseguraban, existían allí. El clientelismo “realmente existente” era sólo un producto de la imaginación de dichos expertos. Ver al respecto Vommaro y Combes (2016, pp. 132-133).

y sueltos, pero parecen volverse “oscuros” y caer en la clandestinidad política cuando esos mismos pobres se organizan, sobre todo cuando esa organización se realiza en el conurbano bonaerense.

En esta dirección, podríamos decir que si en un barrio precarizado sus habitantes se organizan para conseguir materiales, reclaman que urbanicen la zona, piden tener cloacas, que haya alumbrado, red de gas natural, bolsones de alimento para los comedores u otros bienes, es natural que dicha organización cuente con ciertos líderes o caras visibles en el barrio, y todavía es más lógico que para lograr sus reivindicaciones los vecinos se reúnan con funcionarios del municipio o de cualquier otra dependencia estatal. No obstante, que haya organización en los barrios humildes ante tantas carencias, reclamos, asistencia estatal y vínculos con funcionarios –elementos que necesariamente suelen darse- de ninguna manera habilita a acusar inmediatamente de la existencia de clientelismo, manipulación o de haber una “política clandestina”, sino que más bien debemos explorar entonces si lo que existe acaso no es una organización política de base plebeya totalmente legítima.

De todas estas preguntas también debería surgir algún tipo de conceptualización sobre los puntos esenciales de lo que entendemos por política. Puesto que para entender la democracia, la participación, la libertad, el liderazgo, la legitimidad y la igualdad –todos tópicos centrales con los cuales funcionan las teorías y filosofías políticas actuales- son difíciles de entender si el clientelismo, las movilizaciones o la compra de votos operan como Auyero sugiere. Por ejemplo: en el modelo transaccional típicamente utilizado de la relación entre el puntero y su cliente, en el cual se cambiarían “fideos por votos”, si es efectivamente cierto, entonces de no poder corregirse esto podría habilitarse o pedirse que los pobres no voten ni opinen ya que “son siempre manipulados¹⁵”. Incluso, la sola sospecha de que la política funciona básicamente de esta manera en el conurbano bonaerense impugnaría cualquier tipo de voluntad política que los habitantes de dichos

¹⁵ Un trabajo con graves errores metodológicos y fuertes sesgos ideológicos sobre la “compra de votos” por parte del peronismo que menciona Auyero (2007, p. 73) para justificar algunas de sus afirmaciones es el de Brusco, Nazareno y Stokes (2006). Una buena crítica a este tipo de planteos se puede encontrar en Quirós (2011a; 2011b).

sectores pudieran tener, anulando la democracia: un voto de alguien del conurbano no valdría lo mismo que un voto de alguien “libre” de la Capital. En otras palabras, nos podríamos preguntar por qué la movilización popular de la Capital, generalmente caracterizada de “clase media”, a Plaza de Mayo durante diciembre de 2001 se caracteriza como “espontanea” y lo que se sucedió en otros lugares del país, con un protagonismo generalmente caracterizado como de “los pobres”, se caracteriza como orquestada, como si estos últimos no tuvieran capacidad de decidir y actuar por sí solos de igual modo que la “clase media”. Parece haber una carga ideológica, muy parecida a los prejuicios dogmáticos y formas peyorativas del clasismo, que no quiere ver en las clases subalternas más humildes su genuina capacidad de decidir y de trazar sus propias acciones. Las perspectivas instrumentalistas con las que se maneja Auyero entonces muchas veces obturan las formas de entender la politización popular.

Conclusión: organización, protesta y democracia

A lo largo de este escrito hemos intentado indagar el planteamiento argumental y empírico de Javier Auyero con respecto a su abordaje de los saqueos de diciembre de 2001 en la Argentina. El trabajo de Auyero sin dudas tiene algunos aciertos. Como, por ejemplo, en el no haber visto sólo en esas formas de acción colectiva simplemente un desorden o un momento de caos sin sentido sino muchos elementos articulados a la forma de vida habitual. Como también fue importante el haber recuperado la voz de las víctimas de los saqueos, los dueños de los negocios saqueados, para recordarnos el precio que pagaron algunos por los eventos de ese periodo. Aunque también en este escrito hicimos muchos cuestionamientos a sus posturas.

Si seguimos a Tarrow, uno de los referentes teóricos de Auyero, leemos: “Para la gente cuya vida está hundida en el trabajo agotador y la desesperación, la oferta de una campaña de acción colectiva excitante, arriesgada y potencialmente beneficiosa puede ser un aliciente”. En donde entender a los saqueos como una forma de protesta e intervención

catártica parece estar en línea con esto. A su vez, Tarrow (1997) también agrega que, en sociedades fuertemente movilizadas, como podría haber sido la Argentina durante esos años, “nadie presta oídos a los movimientos, aunque medio millón de manifestantes marchen calle abajo. Un resultado de esta falta de impacto es que algunos militantes tienden a formas de actividad política más rutinarias, mientras que otros se sienten tentados por formas más extremas de acción colectiva, violencia y simbolismo para atraer la atención y radicalizar las confrontaciones con las autoridades” (pp. 52-53). En esta dirección, al comenzar este artículo planteamos una situación dicotómica central, señalando que sólo puede haber dos posturas básicas: o bien los saqueos estuvieron orquestados por el aparato partidario del peronismo y su red de punteros, o bien no lo estuvieron. Por toda la información y los argumentos presentados, nos parece que la respuesta es unívoca: ni el peronismo ni ningún otro actor estuvo detrás de los saqueos, sino que dichas formas de acción colectiva por parte de los sectores populares deben de ser entendidas tan libres, genuinas o “espontáneas” como cualquier otra de ellas, ya sean piquetes, cacerolazos y demás formas de acción. Por supuesto, podría intentarse introducir algunos matices, como una suerte de “tercera vía”, si es que no se quiere descartar totalmente la teoría de que los punteros peronistas fueron los organizadores de por lo menos algunos saqueos. Por ejemplo, se puede pensar que los punteros no hayan organizado totalmente los saqueos, sino –como sugiere fuertemente Auyero- haber hecho correr los rumores para crear así la “oportunidad” de que ocurran. Otra opción es decir que los saqueos del interior del país sí fueron “genuinos”, pero en los del conurbano bonaerense no, donde se aprovechó los estallidos provinciales para montar luego –una vez ocurridos aquellos- operaciones de agitación y desestabilización política contra De la Rúa. Esta última opción, yo mismo la creí durante varios años (Zicari, 2016b). Sin embargo, con el tiempo fui encontrando elementos para descartar ambas opciones intermedias.

Con respecto a la primera, valga repetir nuestro planteo principal: parece imposible pensar en que algún actor único (ya sea el peronismo, el radicalismo o el que actor que sea) haya podido centralizadamente haber estado esparciendo rumores o acciones de agitación por tantos puntos del país (o incluso pensar que lo hizo en otros países latinoamericanos

donde también hubo saqueos). Como, además, que los motivos para tal cosa parecen quedar de lado ya que los saqueos continuaron durante 2002 y 2003 en varias provincias y municipios del país sin importar su color partidario. Entonces no tendría sentido que algún actor haya querido sostener los saqueos durante tanto tiempo, agregando también que es difícil encontrar alguno que hubiera contado con los recursos suficientes como para hacerlo (algo realmente imposible). Por su parte, como destacamos arriba, concentrar toda la mirada en el aparato del PJ como si hubiera sido un partido monótono y todopoderoso, cuando estaba profundamente dividido, con liderazgos, objetivos e intereses en conflicto, es no tener presente las características básicas de dicho actor en aquél contexto¹⁶.

La segunda opción intermedia se contesta en parte con algunos elementos recién expuestos: los saqueos en el conurbano continuaron en los mismos lugares y municipios una vez que el peronismo llegó al poder central. Si bien se podría decir que la presencia de punteros peronista fue innegable en muchos casos durante diciembre de 2001, también es cierto que ya aclaramos que participar o “gestionar” esos saqueos no fue porque un poder oculto así lo deseó, sino porque la fuerza y la demanda popular de las bases para pasar a la acción lo impusieron. El mismo Auyero, un año antes de publicar su libro, parece estar de acuerdo con este punto de vista, pensando de manera muy diferente a las teorías conspiracionistas sobre la maquinaria del peronismo que después defendió. Decía él: “Uno puede demostrar que muchos dirigentes peronistas estuvieron involucrados en los hechos. Pero de ninguna manera se puede decir (o al menos yo no obtuve esas evidencias en mis investigaciones) que los saqueos fueron organizados por el PJ” (*La Nación*, 17 de diciembre de 2006); lo que vuelve una lástima su cambio de postura y que en su libro no dejara de responsabilizar al peronismo sin presentar evidencia suficiente como para respaldar lo que dice. Por último, si sólo algunos saqueos del 19 de diciembre pudieron

¹⁶ Es cierto que el peronismo durante ese periodo buscó utilizar formas de descontrol y de violencia colectiva, creándolas o produciéndolas, como herramienta de lucha por el poder político. Aunque debemos decir que esto parece ser una forma utilizada esencialmente para resolver diferencias políticas dentro de los sectores del PJ y no contra otros partidos políticos. Cuando Rodríguez Saá fue presidente de la Nación a fin de 2001, designado por los gobernadores peronistas del Frente Federal, hubo un incendio al Congreso Nacional y un intento de copamiento a la Casa Rosada, eventos que toda la evidencia apunta a que fueron provocados por el poder bonaerense duhaldista (Zicari, 2012). Empero, un año después, cuando el bonaerense ya era el presidente del país, desde el duhaldismo empezaron a acusar a sectores del menemismo de alentar saqueos y promover el caos para debilitar a Duhalde (*Clarín*, 1 de diciembre de 2002; 3 de diciembre de 2002).

estar organizados, carecemos de un método que nos diga cuáles saqueos fueron “genuinos” y cuáles los operados. Por lo que debemos seguir sosteniendo que, si no se quiere admitir que en ningún saqueo hubo complot, que por lo menos se acuerde que en la inmensa mayoría de ellos no lo hubo. Si bien es difícil probar “lo que no pasó” como se intenta aquí, y más bien habría que presentar elementos que prueben la orquestación o el complot, nunca es posible desprenderse del todo de las sospechas, pero sobre todo también por una cuestión ideológica.

En este sentido, parte de los motivos que impiden reconocerle la plena gestación de los saqueos a los sectores populares puede ser el prejuicio o dogma de que estos sectores no son capaces de tener iniciativa propia o de que son siempre fácilmente manipulables, como si dependieran de una elite que los conduzca y les baje la lluvia y el sol desde el cielo. Un prejuicio que, como ya señalamos, se sostiene en leyendas negras que afectan a la democracia, niegan la igualdad, la voluntad de los grupos y desacreditan otras formas de organizar y vivenciar la política.

Para cerrar, vale la pena recordar que los intentos de deslegitimación o de quitar la capacidad de autonomía de los sectores subalternos son ciertamente históricos. Por ejemplo, cuando se intentó explicar por parte de las autoridades los saqueos de 1989, el ministro del Interior de aquél entonces, Juan Pugliese, acusó directamente a “grupos de ultraizquierda” y a la “izquierda partidaria” mandando a encarcelar –sin ningún tipo de pruebas- al líder del Partido Obrero, Jorge Altamira (*Clarín*, 30 de mayo de 1989 cit. en Serulnikov, 2017). El gobernador de Córdoba y candidato presidencial por el radicalismo, Eduardo Angeloz, dijo que “los actos de pillaje fueron perfectamente orquestados por activistas y agitadores” (*Clarín*, 28 de mayo de 1989 citado en Serulnikov, 2017). El gobernador de Buenos Aires, y presidente del PJ, Antonio Cafiero, fue más lejos señalando que existían “elementos de prueba suficientes como para responsabilizar a antiguas formaciones guerrilleras” (*Clarín*, 31 de mayo de 1989 citado en Serulnikov, 2017), lo mismo que las Fuerzas Armadas, que hablaron de un “rebrote subversivo” de los años 70 y que los saqueos eran “la continuación del asalto terrorista al regimiento de La Tablada”

(Página 12, 3 de junio de 1989 citado en Serulnikov, 2017). En otro orden, hablando quizás del acto popular de masas más importante del siglo XX argentino, el 17 de octubre de 1945, también se buscó desmerecerlo en su momento, señalando que estuvo digitado, armado por “agitadores” o “delincuentes” y que en dicho evento no había participado la “verdadera clase trabajadora”. El periódico socialista *La Vanguardia* dijo que si los trabajadores “cesaron en su trabajo el día miércoles y jueves no fue por autodeterminación, sino por imposición de los núcleos anteriores, amparados y estimulados por la policía” (*La Vanguardia*, 23 de octubre de 1945 citado en James, 1995, p. 112). El partido Comunista opinó igual, ya que esas masas “con aspecto de murga” eran conducidas por elementos del “hampa” y no por líderes obreros realmente conscientes (*La Vanguardia*, 23 de octubre de 1945 citado en James, 1995, p. 111). Desde la alta prensa, diarios como *La Nación* y *La Prensa* se refirieron a que, si esas “hordas salvajes” se hubieran movilizado por voluntad propia, no habrían hecho los destrozos y robos que ocurrieron y sólo realizados por “gente sin educación” y en un “clima de especial bullicio” (*La Nación*, 18 de octubre de 1945 citado en James, 1995). Mientras que el diario *Crítica* sugería no darle importancia al evento, puesto que eran personas sin instrucción cívica, gente inexperta en la política dado que “en su mayoría eran jóvenes de menos de veinte años” (*Crítica* 17 de octubre de 1945 citado en James, 1995). Así, ayer como hoy, si se dejara de menospreciar la voluntad y las acciones populares, es probable que podamos comprender mejor nuestra propia historia y con ello asignarle su verdadero sentido político.

Bibliografía

1. Altamira, J. (2002). *El Argentinazo. El presente como historia*. Buenos Aires: Ediciones Rumbos.
2. Auyero, J. (1997). *¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político*. Buenos Aires: Losada
3. Auyero, J. (2001). *La política de los pobres. Las prácticas del clientelismo del Peronismo*. Buenos Aires: Manantial.

4. Auyero, J. (2006). La zona gris. Las características políticas de los saqueos de 2001 en la Argentina. En Cheresky, I. (Comp.) *Ciudadanía, sociedad civil y participación política*. Buenos Aires: Miño y Davila.
5. Auyero, J. (2007). *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
6. Blasco, M. y Fradkin, R. (2004). “¿De qué hablamos cuando decimos 19 y 20 de diciembre?”. *Global en español*, (1).
7. Brusco, V., Nazareno, M. y Stokes, S. (2006). “La compra de votos en la Argentina”. *El debate político. Revista Iberoamericana de Análisis Político*, (4/5), pp. 163-186.
8. Causa 348/2002, caratulada “Infracción a la ley de la defensa de la democracia” y denominada “causa complot contra De la Rúa”.
9. Di Meglio, G. y Serulnikow, S. (Comp.). (2017). *La larga historia de los saqueos en la Argentina: De la independencia a nuestros días.*: Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
10. Enacam, S. y Rocca, S. (2007). *Cacerolazos y saqueos: su construcción mediática*. (Tesis de grado). Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
11. Farinetti, M. (2002). La conflictividad social después del movimiento obrero. *Nueva Sociedad*, (182), pp. 60-75.
12. Fradkin, R. (2017). Saqueos en tiempos de revolución. Apuntes sobre la experiencia rioplatense. En Di Meglio, G. y Serulnikow, S. (Comp.) *La larga historia de los saqueos en la Argentina: De la independencia a nuestros días*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
13. Frederic, S. (2004). *Buenos vecinos, malos políticos. Moralidad y política en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Prometeo.
14. Fundación Nueva Mayoría (2002a). *2014 cacerolazos desde el 19 de diciembre de 2001*. Buenos Aires: Nueva Mayoría.
15. Fundación Nueva Mayoría (2002b). *Crecieron los saqueos en noviembre*. Buenos Aires: Nueva Mayoría.
16. Fundación Nueva Mayoría (2003). *Aumentaron los cortes de rutas después de la elección*. Buenos Aires: Nueva Mayoría.

17. Fundación Nueva Mayoría (2013). *Tercera ola nacional de saqueos*. Buenos Aires: Nueva Mayoría
18. Germani, G. (1957). *Política y sociedad en una época de transición*. Buenos Aires: Paidós.
19. Ginzburg, C. (2004). Saqueos rituales. Premisas para una investigación en curso. Tendencias. Rosario: Prohistoria.
20. Gordillo, M. (2017). La violencia anunciada. El ruido de las ollas vacías. En Di Meglio, G. y Serulnikow, S. (Comp.) *La larga historia de los saqueos en la Argentina: De la independencia a nuestros días*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
21. Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva del Instituto Gino Germani (2002). *La trama de la crisis Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001*. Buenos Aires: CLACSO.
22. Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. (2003). *La insurrección espontánea. Argentina diciembre de 2001. Descripción, periodización, conceptualización*. Buenos Aires: PIMSA.
23. Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. (2006). Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina. En Caetano, G. (Comp.) *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. Buenos Aires: Clacso.
24. James, D. (1995). 17 y 18 de octubre: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina. En Torre, J. (Comp.) *El 17 de octubre*. Buenos Aires: Ariel.
25. Murmis, M. y Portantiero, J. (1971). *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
26. Neufeld, M. y Cravino, M. (2007). Entre la hiperinflación y la devaluación: 'saqueos' y ollas populares en la memoria y trama organizativa de los sectores populares del Gran Buenos Aires (1989-2001). En Cravino, M. (ed.) *Resistiendo en los barrios. Acción colectiva y movimientos sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires*. UNGS: Los Polvorines.
27. Ossona, J. (2014). *Punteros, malandras y porongas. Ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

28. Ossona, J. (2017). Los saqueos en Lanús y en Villa Fiorito del 19 de diciembre de 2001. En Di Meglio, G. y Serulnikow, S. (Comp.) *La larga historia de los saqueos en la Argentina: De la independencia a nuestros días*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
29. PIMSA (2002). Documentos y Trabajos 2002. Buenos Aires: PIMSA.
30. PIMSA (2003). Documentos y Trabajos 2003. Buenos Aires: PIMSA.
31. PIMSA (2004). Documentos y Trabajos 2004. Buenos Aires: PIMSA.
32. Quirós, J. (2008). Los saqueos de 2001 y los grises de la política: una invitación a sociologizar lo clandestino. *Estudios en Antropología Social*, (1), pp. 200-211.
33. Quirós, J. (2011a). El clientelismo como incógnita. Antropólogos, sociólogos y politólogos. *Desarrollo Económico*, (200), pp. 631-640.
34. Quirós, J. (2011b). *El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida)*. Buenos Aires: Antropofagia.
35. Sartelli, E. (2003). *La plaza es nuestra. El Argentinazo a la luz de la lucha de la clase obrera en la Argentina del siglo XX*. Buenos Aires: Ediciones RyR.
36. Pereyra, S. y Semán, P. (2017). Los saqueos de diciembre de 2013. Violencia, protesta y desigualdad social. En Di Meglio, G. y Serulnikow, S. (Comp.) *La larga historia de los saqueos en la Argentina: De la independencia a nuestros días*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
37. Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza: Madrid.
38. Vommaro, G. (2008). A diez años de ¿Favores por votos? El clientelismo como concepto y como etiqueta moral. En Rinesi, E.; Vommaro, G. y Muraca, M (Comp.) *Si este no es el pueblo. Hegemonía, populismo y democracia en Argentina*. UNGS-IEC, Buenos Aires.
39. Vommaro, G. y Quirós, J. (2011). ‘Usted vino por su propia decisión’: repensar el clientelismo en clave etnográfica. *Desacatos*, (36), pp. 65-84.
40. Vommaro, G. y Combes, H. (2016). *El clientelismo político desde 1950 hasta nuestros días*. Siglo XXI Editores: Buenos Aires.
41. Zícari, J. (2012). Gobernar con una sonrisa. La semana de Rodríguez Saá como presidente de la Nación. *Realidad Económica*, (272).

42. Zícari, J. (2014a). El réquiem del uno a uno. Tres corridas bancarias y la instauración del corralito en el final de la convertibilidad. *Realidad Económica*, (281), pp. 33-65.
43. Zícari, J. (2014b). Ajuste estatal sin equilibrio político. La gestión de López Murphy como ministro de Economía de la Alianza en marzo de 2001. *Revista Colección*, (24).
44. Zícari, J. (2014c). Las elecciones legislativas del 2001. Entre el ‘voto bronca’ y el final del gobierno de la Alianza. *Anuario de Historia*, (26).
45. Zícari, J. (2014d). Matrioskas económicas. La convertibilidad argentina, sus ciclos y crisis. Dinámica interna, sistema bancario, déficit fiscal y endeudamiento. *Ensayos de Economía*, (45), pp. 155-181.
46. Zícari, J. (2015). De la cooperación al enfrentamiento. Los quiebres en el movimiento piquetero argentino a partir de las asambleas nacionales del año 2001. *Naveg@merica. Revista de la Asociación Española de Americanistas*, (14).
47. Zícari, J. (2016a). Hasta que la crisis nos separe. Alfonsín, De la Rúa y el partido durante el gobierno de la Alianza (1999-2001). *Cambios y permanencias*, (7), pp. 312-359.
48. Zícari, J. (2016b). De la derrota a la presidencia. La trayectoria política de Eduardo Duhalde entre 1999 y 2001. *Trabajos y comunicaciones*, (44), pp. 1-30.
49. Zícari, J. (2016c). Las dos crisis de la convertibilidad y su dispar resolución. Una explicación sociopolítica. *Espectros. Revista cultural*, (3), pp. 1-38.
50. Zícari, J. (2017a). Del colapso de la convertibilidad a las bases económicas de la recuperación. La economía política de la presidencia de Eduardo Duhalde. En Pucciarelli, A. (Coord.) *Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal* (pp. 35-60). Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
51. Zícari, J. (2017b). Estrategias individuales, consecuencias colectivas. La renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia. *Temas y debates. Revista universitaria de ciencias sociales*, 20(34).
52. Zícari, J. (2017c). Miradas sobre el colapso. Una revisión crítica de las explicaciones económicas y sociopolíticas de la crisis argentina de 2001. *Cuadernos del Cendes*, (94).

53. Zícari, J. (2018a). Liderazgo fuerte, partido débil. Ascenso y rápida desaparición política de Chacho Álvarez y del Frepaso en la Argentina. *Naveg@merica. Revista de la Asociación Española de Americanistas*, (20).
54. Zícari, J. (2018b). *Camino al colapso. Cómo los argentinos llegamos al 2001*. Buenos Aires: Ediciones Continente.